

9007 X411 P U 000000000000

X Cédilia Olaya  
2315200

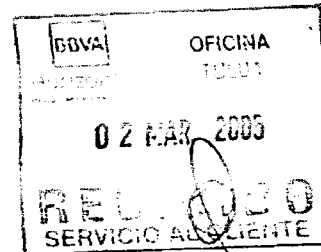
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
0214798345

DEVOLVER COPIA FIRMADA 08 MAR 2005

CJS-05 1969

Bogotá D.C. 5 FEB. 2005

Señor  
**FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**  
Manzana E Casa No. 28 Urbanización Paraiso  
Tel: 2315200  
Tulúa - Valle del Cauca



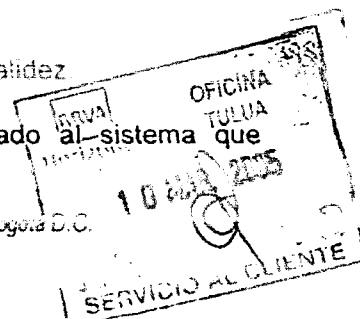
Apreciado señor,

En relación con el trámite de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez solicitada por usted y considerando que:

1. Usted suscribió formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, en calidad de trabajadora dependiente el día 01 de julio de 2004.
2. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, le dictaminó el siguiente porcentaje de pérdida de capacidad laboral: DEFICIENCIA: cuarenta y cinco punto cero ciento (45.00%), DISCAPACIDAD: nueve punto treinta por ciento (9.30%) y MINUSVALIA: veinticinco punto veinticinco por ciento (25.25%) para un total de setenta y nueve punto cincuenta y cinco por ciento (79.55%) de pérdida de capacidad laboral tomando como base el Manual Unico para Calificación de Invalidez y estableciendo como fecha de estructuración el día 9 de enero de 2005 y de origen común.
3. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se establece que se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
4. Una vez en firme el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca se procedió a verificar el cumplimiento de las semanas que dan derecho a pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que establece los requisitos para obtener la pensión de invalidez en los siguientes términos:

"Artículo 1. - Requisitos para obtener la pensión de invalidez

Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que





# Horizonte

Pensiones y Cesantías

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
ced. 14.798.349

conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

a) Invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez;

b) Invalidez causada por accidente: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez

(...)"

5. Se procedió a verificar si usted cumple con el requisito de las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a su fecha de estructuración de la invalidez, esto es desde enero de 2002 hasta enero de 2005.
6. El estudio demostró que usted tan solo cotizó al Sistema General de Pensiones 2571 semanas durante este tiempo, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas exigidas por la ley.
7. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 72 establece la devolución de saldos por invalidez, de la siguiente manera:

**"ART. 72. DEVOLUCION DE SALDOS POR INVALIDEZ.**- cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiera lugar.

No obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una pensión de vejez."

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos ya señalados de la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de



**Horizonte**

Pensiones y Cesantías

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
cc 14.798.345

2003 el Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS. RECHAZA su solicitud de pensión de invalidez.

Por lo anterior, y en caso de que usted no desee continuar cotizando para acceder a una pensión de vejez, esta Sociedad Administradora procederá a devolverle los aportes consignados en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y el bono pensional si a ello hubiera lugar.

A continuación informamos la documentación que debe presentar con el fin de hacer efectiva la devolución de saldos:

- Formatos de autorización de devolución de saldos que se anexan debidamente diligenciados.
- Certificación emitida por la entidad bancaria donde conste el tipo, número de cuenta y su nombre como titular de la misma.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en la oficina de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, mas cercana al lugar de su residencia.

Atentamente,

**DIRECTOR DE AFILIACIONES Y BONOS PENSIONALES**

JRGO  
cc 14.798.345

104

104

22 SET. 2006



Bogotá D.C.

Señor

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
CALLE 6 10 60 SEGUNDO PISO  
CORINTO  
CAUCA

Ref. Rad. Porvenir. 7100222007136300

CC. 14796345

T.N. 8613379 - 8613821 - 8618775 - 8618956

COR-BENEF

Respetado Señor Espinosa:

Reciba un cordial saludo de Porvenir S.A.

De manera atenta, damos respuesta a su requerimiento radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, del cual recibimos traslado, en los siguientes términos:

Esta Sociedad Administradora mediante comunicación con radicado CJB-05-7989 del 25 de febrero de 2006, definió de fondo su prestación pensional, rechazándola y otorgando devolución de salidas por cuanto usted no cumplió con el requisitos de las semanas de cotización que dan derecho a la pensión de invalidez, Toda vez que cotizó un total de 25.71 semanas en los tres (3) últimos años anteriores a la fecha de la estructuración de su invalidez, hecho que se le informó al momento de diligenciar el formato de la reclamación pensional.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, que establece los requisitos para obtener la pensión de invalidez, a saber:

*"Artículo 1°. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 39 Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

- 1. Invalidez causada por enfermedad. Que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.*
- 2. Invalidez causada por accidente. Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma (...)"*



En lo que respecta a los tiempos servidos por parte de nuestro afiliado a las Fuerzas Militares bajo el servicio militar obligatorio, le informo que dichos tiempos por tratarse de un régimen exceptuado, no son computables como cotizaciones dentro del Sistema General de Pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, para la generación del derecho al pago de una pensión de invalidez o de sobrevivientes, pues repetimos la cobertura de estas contingencias únicamente se da mediante el pago de la prima de invalidez y muerte a la compañía aseguradora con la que se tiene contratado el seguro previsional del afiliado.

Por esta razón, y dado que en el caso consultado no se dio por parte de nuestro afiliado el pago de las primas de seguros correspondientes en el número exigido por la Ley de 1993, el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez resulta improcedente, pues se repite los tiempos de servicio militar no son se pueden contabilizar para dichos efectos.

Ahora bien, si bien es cierto los tiempos de servicio de una persona vinculada al régimen especial y exceptuado de las Fuerzas Militares no se constituyen como aportes válidos para el cumplimiento de las pensiones de invalidez y sobrevivientes de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad del cual hace parte PORVENIR S.A., no por ello ha de entenderse que dichos tiempos se olvidan para dicha persona, pues conforme lo determina el numeral 3.º del artículo 3 de la Ley 920 de 2004, dichos tiempos serán reconocidos como bonos pensionales, a saber:

*"Artículo 3º. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:*

*"( )*

*En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiraron o sean retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones."*

Como puede observarse, estos tiempos de servicio únicamente aplican para la expedición de bonos pensionales, pero en ningún momento pueden tomarse dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como aportes pensionales respecto de los cuales se descuenta un porcentaje para el pago de las primas de los seguros de invalidez y muerte de nuestros afiliados. De hecho, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, dispone que estos tiempos de servicio militar únicamente pueden computarse para temas pensionales, en las pensiones de vejez que reconozcan las entidades del Estado, a saber:

*"ARTICULO 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:*

*a) En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; "*

Conforme con la disposición anteriormente transcrita, queda claro que los tiempos de servicio militar, sólo pueden ser tenidos en cuenta para pensiones de vejez, y no para tiempos de invalidez y sobrevivientes por razones más que lógicas.

Ahora bien, esta Sociedad Administradora está realizando las gestiones pertinentes para la reconstrucción de su historia laboral, documento fundamental y requisito esencial para solicitar la emisión del bono pensional. Es así que, el 21 de septiembre de 2018, solicitó a través de certificación por Centro Único de Certificantes no ISS -CENISS, al Ministerio de Defensa, certificar los tiempos laborados de nuestro afiliado en los formatos establecidos. (Se adjunta soportes)

Es importante indicar que nuestro compromiso es realizar todas las gestiones para lograr que su bono pensional quede reconocido y pagado por las entidades responsables en el menor tiempo posible, por tal razón le seguiremos informando.

Sea lo primero señalar que, en lo que respecta el reconocimiento y pago de bonos y/o cuotas parte de bonos pensionales, que PORVENIR, conforme las disposiciones legales respectivas, siempre está presto a realizar todas las gestiones tendientes a lograr la emisión y redención de los bonos pensionales de nuestros afiliados, aun cuando la Ley indica que somos intermediarios, en donde su actuación se limita únicamente a realizar todos los trámites que sean necesarios para que se produzca el reconocimiento y pago, por lo tanto no le es dable determinar la existencia o no del derecho al reconocimiento de un bono pensional, como claramente lo dispone el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20 del Decreto 1517 de 1995.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, no es jurídicamente procedente que esta Administradora le apruebe pensión de invalidez como tampoco el pago de las mesadas pensionales, ni la indexación, como tampoco el pago de intereses moratorios.

En los términos descritos damos respuesta a su solicitud de información



**PAOLA ANDREA ALVAREZ CARVAJAL**

Atención Integral a Clientes

PAACI-Ledy C

16 OCT 2003

224017  
Bogotá D.C.,

Coronel  
Lina Maria Torres Camargo  
Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales  
Ministerio De Defensa Nacional  
Carrera 57 No 43-28 Puerta 8 Car  
Bogotá D.C. - Guadalupe

Radicado Porvenir S.A.



0200001153347900

Rel. Rad. Porvenir S.A.  
C.C. 14798345  
Tipo de red: CON ANTICIPADA POR INVALOR7  
T N N A  
COR - BON

Porvenir S.A. le da un saludo cordial.

Con el fin de concluir el trámite del bono pensional de nuestro(a) afiliado(a) FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 14798345, Porvenir S.A., en representación del afiliado y en virtud de lo estipulado en el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se permite solicitar el reconocimiento y pago del cupón a su cargo.

Este bono pensional se encuentra liquidado en la página de la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a las certificaciones de tiempo y de servicio expedidas por los empleadores antes del traslado de régimen, debidamente expedidas conforme al artículo 22 del Decreto 1513 de 1998 y que se adjuntan al presente, los cuales gozan de presunción de legalidad, e igualmente los períodos cotizados en COLPENSIONES, cargados en la liquidación directamente por dicha entidad mediante el procedimiento establecido en el artículo 5 del decreto 3798 de 2003, el cual se presume de derecho certificado, conforme a la misma norma.

Es importante informarle que si su entidad es el emisor del bono pensional de conformidad con los artículos 119 y 120 de la Ley 100 de 1993, es necesario que su entidad proceda con la notificación a los contribuyentes en el bono pensional para asegurar el reconocimiento y pago oportuno de las cuotas partes del mismo.

Así mismo, es importante destacar que el artículo 55 del decreto 1748 de 1995, establece la obligación de pago de cuotas partes con total independencia para evitar sanciones moratorias.

Le solicitamos amablemente que la resolución de reconocimiento y pago proferida por su entidad se ajuste a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 1748 de 1995 adicionado por el artículo 27 del Decreto 1513 de 1998, con el fin de que el bono pueda ser emitido en los términos legales.

Esta solicitud se hace con fundamento en el artículo 20 de la Ley 1799 de 2013, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del artículo 3 del C.C.A., y del artículo 7 del decreto 510 de 2003 en atención a que del reconocimiento y pago del presente bono por parte de su entidad, depende el reconocimiento del beneficio pensional del solicitante y la dilación en su pago puede conllevar al pago de intereses moratorios conforme al artículo 12 del Decreto 1748 de 1995. Para tal efecto se requiere que su entidad expida el acto administrativo o documento privado de reconocimiento y confirme su participación en el bono, por medio de la respectiva marcación en el sistema de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Le agradecemos proceder con el reconocimiento y pago de este bono pensional dentro de los 45 días siguientes al recibo de esta solicitud, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 3798 de 2003.

En virtud de lo expuesto, Porvenir S.A. solicita reconocer y pagar el cupón a su cargo de acuerdo a lo indicado por la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los Instructivos 8 o 9 de 2007 según les corresponda, para tal efecto adjuntamos los siguientes documentos soporte:

- ✓ Copia cédula de ciudadanía.

- ✓ Copia registro civil de nacimiento.
- ✓ Formato de Afiliación a Porvenir.
- ✓ Historia laboral donde se encuentra la manifestación prevista en el inciso 1 del Artículo 14 del Decreto 1474 de 1997.
- ✓ Certificaciones laborales expedidas por los empleadores, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1993.
- ✓ Fecha de traslado reportada en Asolendos (SIATFP).
- ✓ Dictamen de Invalidez.
- ✓ Liquidación de Tiempos de Bono Pensional, donde se encuentra certificada la información de Colpensiones, conforme al artículo 5 del Decreto 3798 de 2003.

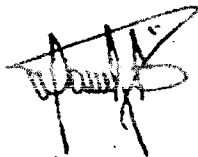
Igualmente, le recordamos que en el evento en que su entidad vaya a hacer uso de los recursos establecidos en la Ley 549 de 1999, debe efectuar los trámites administrativos señalados en la mencionada norma con mayor celeridad, a fin de garantizar que el pago del bono pensional de nuestro afiliado se efectúe dentro de los términos del artículo 17 del Decreto 1748 de 1991, toda vez que, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Ley 549 de 1999, su responsabilidad en el pago del cupón a su cargo no cesa por incumplimientos en los términos legales o por los requisitos propios para acceder a los recursos del FONPET.

En ese sentido, se solicita enviar la resolución mediante la cual se informe que se va a disponer de los recursos de la cuenta de propósito general, la autorización del Representante Legal y copia del Acto Administrativo de incorporación de los recursos al Presupuesto de la vigencia fiscal 2016.

Para efectos del pago, debe hacerse a nombre de PORVENIR FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS con NIT: 500.204.506-6, a número de cuenta corriente 210-09787-4 del Banco de Occidente, conforme al formulario anexo, y remitir copia de la consignación junto con la Resolución Notificación Reconocimiento y Pago Bonos Pens - Porvenir S.A. [notirecpagobonospens@porvenir.com.co](mailto:notirecpagobonospens@porvenir.com.co) queda a la espera del reconocimiento y pago. Para información adicional sobre esta comunicación, lo invitamos a comunicarse con Maritza Arevalo Analista de Bonos Pensionales al teléfono 3393000 Ext. 75651, o a la dirección en Bogotá D.C. en la Carrera 13 N° 26 A - 65 Piso 5, en donde gustosamente atenderemos sus inquietudes.

Para dar respuesta a este comunicado por favor cite el número TN- 1894 - "14798345".

Cordial Saludo,



DARÍO BARBOSA VELEZ  
Coordinador de Bonos Pensionales y Aportes de Prima Media  
GERENCIA DE BENEFICIOS PENSIONALES  
DBV/ Andrea A.

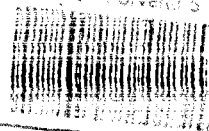
109

BEN-DDS

Tuluá 09 Junio 2016

TN 8503090  
Rota N° 2737

Radicado - Porvenir S.A.



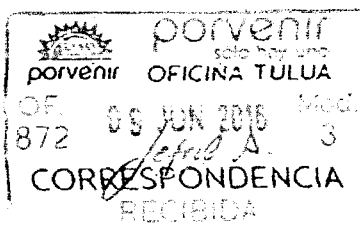
0103872011324200

CC 14798345

Señores

PORVENIR S.A

Tuluá



#### DEVOLUCION DE SALDOS

Esta tiene por objeto manifestarles que estoy de acuerdo con el rechazo de la pensión de invalidez y acepto la correspondiente devolución de saldos a la cual hay lugar.

Autorizo que dicha devolución sea realizada por medio de cheque a la oficina Tuluá.

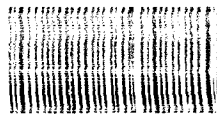
Atentamente

FABIO ALONSO ESPINOSA  
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA

14798345

377 812 0503

Radicado - Porvenir S.A.



0200001137762000

22401/

25 OCT. 2006

Bogotá D.C.

Señor(a)

JOSE TEODORO GONZALEZ

Manzana E Casa 28 El Paraíso

Tulua, Valle

Ref. Rad. Porvenir N.A.

CC 14798345

T.N. N.A.

COR - BON

Respetado(a) Señor(a):

Gracias por confiar en Porvenir como su Administradora de Fondos de Pensiones.

Realizada la validación correspondiente a su solicitud de actualización y conformación de la historia laboral del afiliado FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 14798345, para nosotros es grato informarle que la misma se encuentra acorde con lo informado por Usted, por lo anterior y con el fin de dar inicio a su solicitud de reconocimiento pensional, le agradecemos nos aporte los documentos relacionados en el listado adjunto.

Una vez cuente con esta documentación le agradecemos comunicarse a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá al teléfono 7447676, en Cali 4857272, en Medellín 6041555, en Barranquilla 3855151, para el resto del país al 018000510800 en donde le asignarán una cita para radicar formalmente la solicitud de pensión.

Para nosotros es muy importante acompañarle en esta etapa de su vida y nuestro compromiso es mantenerlo informado en todo el proceso de reconocimiento pensional.

Cordialmente,

DARIO BARBOSA VELEZ

Coordinador De Bonos Pensionales Y Aportes De Prima Media

DBV / Susana @

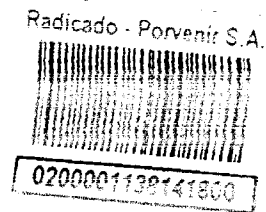
Anexos - Listado de documentos de reclamación de INVALIDEZ

- Formulario trámite de Reclamación por INVALIDEZ

111

547/  
Bogotá D.C.

09 NOV. 2016



Señores  
BBVA SEGUROS DE COLOMBIA S.A.  
Attn. Maria Zobeida Rincon Herrera  
Avenida Calle 72 No. 9 - 54 Edificio BBVA  
Bogotá, D.C.

Ref. Rad Porvenir: N.A  
C.C. 14798345  
T.N. N/A  
COR-BEN

Respetados señores

De acuerdo con lo establecido en la póliza del seguro previsional y teniendo en cuenta el término señalado en el artículo 3° y 4° del Decreto 876 de 1994, me permito solicitar el pago del caso crado a continuación y que corresponde a trámite aprobado por Suma Adicional.

No.	RECLAMACIÓN	CEGULA	AFILIADO	SUMA ADICIONAL	OBSERVACIONES
1	INVALIDEZ	14798345	FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA	SUMA ADICIONAL	SE SOLICITA PAGO DE SUMA ADICIONAL

Es de aclarar que el caso que se relaciona a continuación se formaliza para liquidar con los soportes adjuntos.

Cordialmente,

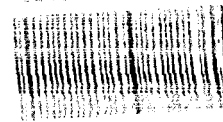
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PREVISIONALES  
LYPEVIA  
PORVENIR S.A.

22401/

Bogotá D.C.

06 DIC. 2016

Radicado Porvenir S.A.



0200001138863500

Señor(a)

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
MANZANA E CASA 28 EL PARAISO  
TULUA, VALLE

Ref. Rad. Porvenir N.A

CC 14798345

U.N.A.

COR - BON

Respetado(a) Señor(a):

Gracias por confiar en Porvenir como su Administradora de Fondos de Pensiones

Realizada la validación correspondiente a su solicitud de actualización y conformación de su historia laboral, para nosotros es grato informarle que la misma se encuentra acorde con lo informado por Usted, por lo anterior y con el fin de dar inicio a su solicitud de reconocimiento pensional, le agradecemos nos aporte los documentos relacionados en el listado adjunto

Una vez cuente con esta documentación le agradecemos comunicarse a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá al teléfono 7447678, en Cali 4857272, en Medellín 6041555, en Barranquilla 3855151, para el resto del país al 018000510000 en donde le asignarán una cita para radicar formalmente la solicitud de pensión.

Para nosotros es muy importante acompañarle en esta etapa de su vida y nuestro compromiso es mantenerlo informado en todo el proceso de reconocimiento pensional.

Cordialmente,

**DARIO BARBOSA VELEZ**

Coordinador De Bonos Pensionales Y Aportes De Prima Media

DBV / Susana P.

Anexos: - Listado de documentos de reclamación de INVALIDEZ

- Formulario trámite de Reclamación por INVALIDEZ



104

Bogotá D.C., 2016-12-16

Señor

FABIO ESPINOSA  
CR 22 B 15 79  
MARACAIBO  
TULUA  
VALLE

Ref. Rad. Porvenir: 0103872011625300  
CC: 14708345  
T.N: 8705536  
COR-BENEF

Porvenir S.A. le da un saludo cordial.

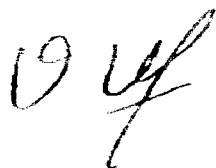
En atención a su solicitud relacionada con la reclamación pensional, le informamos lo siguiente:

Realizada la validación correspondiente en nuestra base de datos, se evidenció que en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Juzgado de Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple de Tulúa Valle, esta Administradora procedió a aprobar la pensión de invalidez.

No obstante, lo anterior la Administradora solicitó a la aseguradora con la cual se tiene contratado el seguro de invalidez y muerte de nuestros afiliados, sobre la viabilidad del pago de la suma adicional de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley 100 de 1993.

Así las cosas, una vez finalice le estaremos informando de la prestación a que tiene derecho.

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.



**ORLANDO VALENCIA AGUDELO**  
Coordinación de Atención Integral a Clientes

Radicado - Porvenir S.A.



0200001140527000

2410/  
Bogotá D.C.

13 FEB. 2017

Señor(a):  
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
Carrera 22 B # 15 - 79  
Tuluá, Valle.

Ref. Rad Porvenir N/A  
Tipo de Solicitud: Solicitud por invalidez  
Afilado: Fabio Espinosa  
C.C. 14.798.345  
T.N. N/A  
COR - BEN

Respetado(a) Señor(a):

La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., se permite informarle que reconoce la solicitud Pensional con fundamento en la información y documentación allegada mediante Sentencia proferida por el Juzgado Tercero (03) del Circuito de Tuluá.

A continuación detallamos la información que usted debe consultar y los pasos a seguir:

**1. ¿Cuál es el valor de la mesada?:**

Para el año 2017 el valor de la mesada es de \$737.717.

**2. ¿La mesada tiene algún descuento?:**

Si, se aplica un descuento del 12% sobre el valor total de la mesada para el pago de salud, que en su caso corresponde a la suma de \$88.525. El valor neto que recibirá mensualmente será de \$649.191.

Este descuento le permite acceder a los servicios en la Entidad Promotora de Salud (EPS) y se debe aplicar independientemente si usted ya es cotizante a salud como empleado o como beneficiario de algún cotizante, dado que el aporte a salud se hace por la totalidad de los ingresos que usted recibe.

**3. ¿Qué pagos recibió a partir del presente reconocimiento?:**

Un pago único por valor de \$90.095.854,00 que corresponde a las mesadas reconocidas a partir del 09 de Enero de 2005 hasta el mes de Febrero de 2017; pago realizado en cheque a través de la Oficina Porvenir Tuluá,

**4. ¿Como se distribuye la pensión? Se distribuye de acuerdo con los beneficiarios que se presentaron en la solicitud y tienen derecho.**

Nombre	Parentesco	% de distribución
FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA	TITULAR	100%

**Próximos pasos que usted debe realizar:**

**5. Cuenta para realizar el pago de la mesada**

Lo invitamos a que realice la apertura de una cuenta bancaria pensional con la cual obtendrá los siguientes beneficios:

- Sin cuota de manejo
- La cuenta es exenta del gravamen de cobro de transacciones financieras (4\*1000)
- **Tiene beneficios especiales en créditos de consumo y tarjetas de crédito.**
- Es opcional el manejo de retiros por tarjeta débito o telefonar.

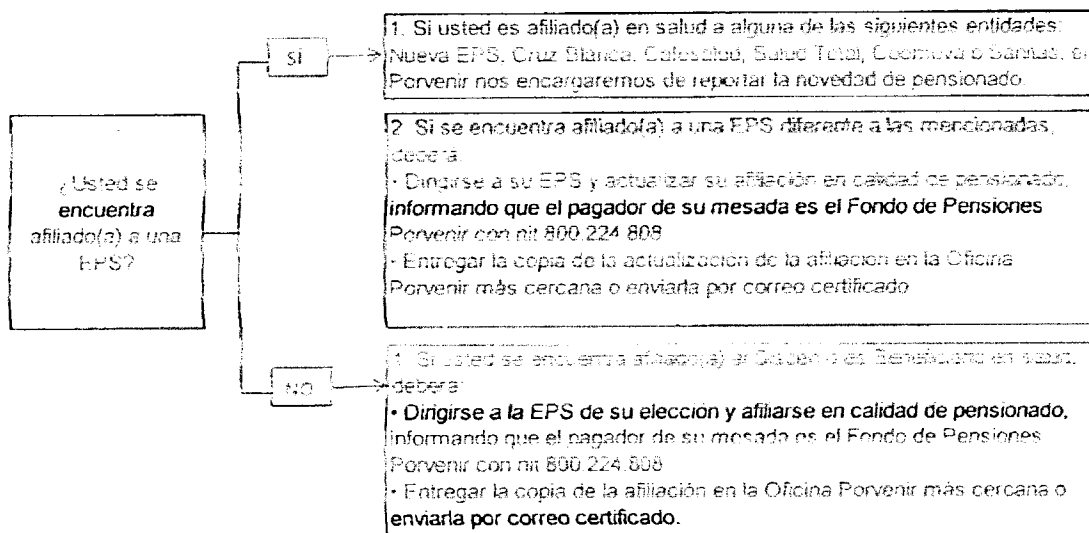
Diríjase a cualquiera de las oficinas a nivel nacional del Banco de Bogotá, Banco Popular, Bancolombia, BBVA donde debe informar que el pagador de su pensión será Porvenir S.A. a través del Fondo de Retiro Programado con nit 900 304 950-0 anexando:

- Copia de esta comunicación.
- Copia de su documento de identidad ampliado al 150%.

Una vez realizada la apertura de la cuenta pensional solicite una certificación de la cuenta y entréguela en la Oficina de Porvenir más cercana o envíela por correo certificado.

Si usted tiene una cuenta bancaria y la informó al momento de radicar su solicitud, en esta cuenta le realizaremos el pago de sus mesadas; si no la informó, le agradecemos solicitar una certificación bancaria de su cuenta y entregarla en la Oficina de Porvenir más cercana o enviarla por correo certificado.

**6. Afiliación a la EPS**

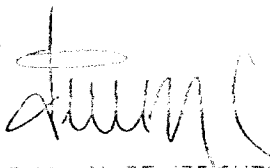


Recuerde que si en un futuro decide trasladarse de EPS, debe informarnos su traslado de forma oportuna en la Oficina Parvenir más cercana o enviarnos por correo certificado, anexando la constancia de aceptación y aprobación de traslado; lo anterior garantizará la prestación de sus servicios de salud.

En resumen, es fundamental que realice los trámites correspondientes a la cuenta bancaria pensional y la EPS para recibir los beneficios del pago de la pensión y de los servicios de salud de manera oportuna.

Tenga la tranquilidad que lo acompañaremos en esta nueva etapa de su vida y que nuestros canales de servicio estarán a su disposición: [www.parvenir.com.co](http://www.parvenir.com.co), Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7447678 o a nivel nacional sin costo 01800510800 y oficinas nivel nacional.

Cordialmente,



DIANA MARTÍNEZ CUEIDES  
Dirección de Litigios  
Yeny R/Johan M.

c.c. Archivo y correspondencia  
Exp. PI 70729

104

Bogotá D.C., 2017-02-13

Señor

FABIO ESPINOSA  
MZ E CA 28 EL PARAISO  
TULUA  
VALLE

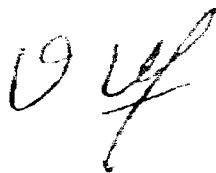
Ref. Rad. Porvenir: 0103872011711000  
CC: 14756345  
T.N: 8756985  
COR-BENEF

Porvenir S.A. le da un saludo cordial.

En atención a su solicitud relacionada con la pensión de invalidez, le informamos lo siguiente:

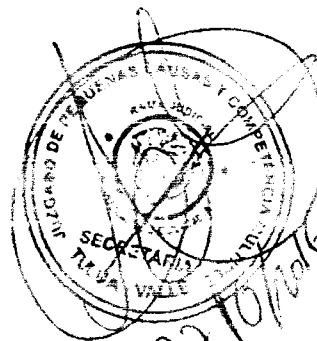
Una vez realizada la validación correspondiente en nuestra base de datos y a todo lo actuado en la reclamación pensional, se registra que se procedió a autorizar por intermedio de cheque para ser reclamado en nuestra Oficina Tulua, el reintegro de mesada pensional desde el 06 de enero de 2006 fecha de la estructuración de la invalidez hasta febrero del año en curso.

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.



**ORLANDO VALENCIA AGUDELO**  
Coordinación de Atención Integral a Clientes

CC 2232  
ENVÍO: 8148708  
RUTA: 31136



2410  
Bogotá

Doctora

**MARIA ISABEL ORTEGA CUBILLOS**

Secretaria

**JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y DE COMPETENCIAS MULTIPLE**

**Tuluá - Valle**

REFERENCIA: IMPUGNACION ACCIÓN DE TUTELA 76-834-41-89-001-2016-00329-00 de **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** Contra **PORVENIR S.A.**  
Oficio del 19 de Octubre de 2016  
Ref. Rad. Porvenir. 7100222007246000  
C.C 14798345  
T.N 8650877

Respetada Doctora:

**DIANA MARTÍNEZ CUBIDES**, mayor de edad, obrando en calidad de Representante Legal Judicial de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías **PORVENIR S.A.**, en esta ciudad, por medio del presente escrito y estando en tiempo para ello, teniendo en cuenta que fuimos notificados del fallo judicial el 21 de octubre del presente año, procedo a **IMPUGNAR** el fallo de tutela de la referencia en los siguientes términos:

Sea lo primero señalar señor Juez, que le solicitamos muy respetuosamente **VINCULE** a la presente acción de tutela a la Compañía de Seguros **BBVA SEGUROS DE COLOMBIA S.A** ya que ésta aseguradora se encuentra a cargo del seguro previsional de los afiliados de la **AFP HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.** hoy **PORVENIR S.A.**, para la fecha de siniestro del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** por lo cual dicha Aseguradora tiene interés en el resultado de la presente acción

Ahora bien, la pensión de INVALIDEZ solicitada por el accionante, no puede ser reclamada por vía de tutela, no solo porque existe otro medio de defensa judicial para reclamar como lo es por la especialidad de la materia la Jurisdicción Ordinaria Laboral, sino porque está plenamente demostrado que no se cumplieron con los requisitos señalados en la ley para generar el derecho a la pensión, haciendo inviable imponerle a esta Sociedad Administradora una obligación que la ley no ha establecido, pues en tal virtud, se estaría incurriendo en una vía de hecho al ordenarse un pago claramente no contemplado ni ordenado legalmente

Por otro lado, los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones». Es que conceder prestaciones sin el lleno de las

exigencias legales afecta el equilibrio financiero del sistema, en cuanto por tratarse de un régimen contributivo se entiende que la prestación se encuentra financiada cuando se satisface el número mínimo de cotizaciones fijado por el legislador y que obedece a una racionalidad económica pensada en función del colectivo de asociados al sistema de seguridad social integral, así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia 47167 del 07 de Octubre de 2015.

Ahora bien, el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** en su condición de afiliado a esta Sociedad Administradora, radica solicitud formal de pensión de invalidez.

Así las cosas, esta Administradora procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Ley 860 de 2003 modificada por la sentencia C-428 de 2009, a saber:

*"ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

- 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.*
- 2. Invalidez causada por accidente. Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.*

*PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria*

*PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."*

El estudio demostró que el señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** NO cumple con el requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización al Sistema General de Pensiones, dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, esto es, desde el 09 de ENERO de 2002 hasta el 09 de ENERO de 2005.

En concordancia con lo anterior, PORVENIR S.A. mediante comunicado del 25 de FEBRERO de 2005 informó al señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** acerca del RECHAZO de su solicitud de pensión de invalidez. (Adjuntamos copia de la comunicación junto con la prueba de envío)

Vale resaltar que de cara al caso del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, lo procedente en su particular caso, según lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley 100

de 1993 era la devolución de saldos al no cumplir los requisitos legales para ser beneficiario de la prestación económica de pensión de invalidez.

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA el 09/06/2016 radico comunicado aceptando la devolución de saldos y solicitando se generará el pago a través de cheque para ser reclamado en nuestra oficina Tijuá.

Ahora bien, el 19 de Septiembre de 2016 el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA radico derecho de petición solicitando la reconsideración de su pensión de invalidez.

Al respecto, el 22 de Septiembre de 2016 esta Administradora da respuesta a la petición reiterando el **RECHAZO** de solicitud de pensión por no cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la misma.

En este punto, es importante precisar señor Juez respecto a los tiempos de servicios por parte del accionante a las Fuerzas Militares bajo el servicio militar obligatorio, dichos tiempos por tratarse de un régimen exceptuado, no son computables como cotizaciones dentro del Sistema General de Pensiones establecido por la Ley 100 de 1993.

*"ARTICULO. 279.-Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. (...)"*

Ahora bien, si bien es cierto los tiempos de servicio de una persona vinculada al régimen especial y exceptuado de las fuerzas militares no se constituyen como aportes válidos para el cubrimiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes de los afiliados al RAIS, no por ello ha de entenderse que dichos tiempos se pierden para dicha persona, pues conforme lo determina el numeral 3.1 del art. 3 de la Ley 923 de 2004, dichos tiempos serán reconocidos como bonos pensionales.

Así mismo, el art. 40 de la Ley 40 de 1993 dispone que estos tiempos únicamente pueden computarse para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley.

**EN ESTE ORDEN, QUEDA CLARO QUE LOS TIEMPOS DEL SERVICIO MILITAR, SOLO PUEDEN SER TENIDOS EN CUENTA PARA PENSIONES DE VEJEZ Y NO PARA PENSIONES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA.**

Hechas las anteriores consideraciones es evidente que nuestra entidad no ha vulnerado ni pretendido vulnerar ningún derecho fundamental, pues el accionante no cumple con el requisito legal de haber cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, para acceder a las prestaciones económicas en ella contempladas.



Por lo anterior está claro que, el no cumplimiento del requisito de haber cotizado 50 años en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez que SE REITERA FUE DECLARADO EXEQUIBLE POR LO QUE NO HAY DUDA RESPECTO A SU APLICACIÓN, conduce indefectiblemente a que se REITERE EL RECHAZO DE LA PENSION SOLICITADA.

Al margen de lo anterior si lo que busca los accionantes con la presente acción de tutela es que se le reconozca la pensión de INVALIDEZ, es importante anotar que debe declararse la presente acción de tutela improcedente por la FALTA DE INMEDIATEZ, pues debe tenerse en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia T 016/06 del 15 de enero de 2006, en la cual se indicó que los requisitos mínimos para la interposición de la misma: es la urgencia, la razonabilidad, y la oportunidad en el tiempo para su interposición:

*La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez. ... la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[11] Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.*

*'(...) la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[12] (C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)*

*"Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.*

*"( )*

*"Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia amba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión."*

*De esta forma, se ha indicado que dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela se encuentra el de la inmediatez. A manera de ejemplo, en la sentencia T-900 de 2004 se expresó:*

*"... la jurisprudencia constitucional tiene establecido que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.*

*"Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley. Así, pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos."*  
(negrita y subrayado fuera de texto)

Lo anterior fue reiterado mediante sentencia T-889/07 del veinticinco (25) de octubre de dos mil siete (2007):

En efecto, a pesar de que la Corte mediante sentencia C-543 de 1992 declaró inexecutable el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que establecía un término de caducidad para ejercer la acción de tutela por considerar que ésta pueda interponerse en cualquier tiempo, debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de inmediatez que gobierna el mecanismo de amparo judicial, la Corte ha señalado igualmente que la interposición de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art. 86 de la C.N., y que justifique el ejercicio de la misma como mecanismo subsidiario y expedito de defensa judicial.

*"(...) La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ... la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[32]*

(...) De esta manera, la clara intención de la acción de tutela es la de poder dar una respuesta eficiente y oportuna a la persona que no cuenta con otros mecanismos judiciales que le aseguren una protección igual de eficiente de sus derechos fundamentales.

Recientemente en sentencia T-936 A de 2006, esta Corporación reiteró que la inmediatez es una condición de procedencia de la tutela, en virtud de la cual la acción debe interponerse dentro de un tiempo razonable y prudencial a partir del momento en que ocurrió la violación o amenaza de los derechos fundamentales, puesto que es un instrumento jurídico que ha sido diseñado para conjurar de manera inminente las perturbaciones sobre los derechos fundamentales, y no para perpetuar indefinidamente actuaciones que pueden ser resueltas válidamente mediante otros medios de defensa judiciales establecidos en el ordenamiento.

Adicionalmente, se precisó que el requisito de inmediatez demanda que la acción de tutela sea presentada en un lapso de tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos generadores de la perturbación, con el propósito de evitar que el paso del tiempo desvirtúe la amenaza o la violación que se cierne sobre los derechos fundamentales, o comprometa incluso la necesidad de su inminente protección.

Así mismo, de manera puntual la sentencia T- 996 A de 2006 emitida por la señalada Corte Constitucional precisó:

"Desconocer la razonabilidad en el plazo de interposición de la acción de tutela, no sólo autorizaría la negligencia o indiferencia de los posibles afectados a la hora de presentar la solicitud de protección constitucional, sino que contribuiría a que se premie indebidamente la desidia en la defensa de los propios derechos[33]. Por eso, y con el fin de propender por la seguridad jurídica, el plazo de interposición de la tutela debe ser por ello oportuno[34], razonable, y evaluable en cada caso concreto".

(Negritas y subrayado fuera del texto)

Igualmente la sentencia SU-061 de 1999, consideró sobre este punto:

*"De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado (...). Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción"[35].*

Así, la inactividad y el excesivo paso del tiempo en el ejercicio de una acción constitucional, permiten suponer el desinterés de los actores en el ejercicio o protección de sus derechos o la inexistencia de una afectación urgente o irremediable, especialmente si no existe "una justa causa predicable para el no ejercicio oportuno del mecanismo constitucional"[36], que desvirtué el descuido o la indolencia en acudir a la protección de los derechos fundamentales".

*La acción de tutela no puede ser utilizada para recuperar oportunidades procesales perdidas. En ese sentido, el recurso de amparo constitucional resulta improcedente cuando con ella se pretende sustituir mecanismos ordinarios de defensa que por descuido o negligencia de quien solicita la tutela, no fueron utilizadas a su debido tiempo[37].*

(subrayado y negrilla fuera de texto)

Así pues, DESPUES DE TRANSCURRIDOS MÁS DE ONCE (11) AÑOS de haberse rechazado la solicitud pensional, (25/02/2005), por no cumplir los requisitos para acceder a la pensión de INVALIDEZ, EL ACTOR ACUDEN A LA ACCION DE TUTELA

POR LO TANTO DEBE DECLARARSE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION POR FALTA DE INMEDIATEZ.

#### EXCEPCIONES A LA SOLICITUD DE TUTELA

##### DESCONOCIMIENTO DEL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 1994, la Acción de Tutela resulta improcedente entre otros eventos, cuando existen otros medios de defensa judicial.

En torno a la anterior causal de improcedencia, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-001 del 3 de Abril de 1992, ha dicho:

*"...la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las siguientes..."*

*"...Solo procede la tutela si no existe otro medio de defensa judicial..."*

En fallo mas reciente esta misma corporación ha señalado:

*"...La finalidad para la cual fue concebida la acción de tutela, como es la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza generada por las autoridades publicas o los particulares en ciertos casos y el carácter excepcional, subsidiario y residual de la misma (C.P., art.86), impiden que con su ejercicio se resuelvan asuntos cuya discusión plantea una controversia por fuera del ámbito constitucional (destacamos)*

*El reconocimiento y pago de prestaciones sociales de tipo económico, por la clase de prestaciones que allí se discuten, persigue la definición de derechos litigiosos de naturaleza legal.*

*Resulta, entonces ajeno a los jueces de tutela entrar a decidir sobre los conflictos jurídicos que surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de pago de una prestación social, por cuanto para ello existen las respectivas instancias, procedimientos y medios judiciales establecidos por la ley; de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los derechos fundamentales de las personas y se ignoraría la índole preventiva de la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos derechos que les impide dictar órdenes declarativas de derechos litigiosos de competencia de otras jurisdicciones..."(Subrayamos) Sentencia No 660/99 Referencia: Expediente No T-217.232, Magistrado Sustanciador Dr. Alvaro Tafur Galvis.*

*"La Corte Constitucional ha considerado que la protección del derecho a la seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del juez.*

*En efecto, al juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos por cuyo reconocimiento y efectividad se procede. En este sentido ha sido clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que "los fallos emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su carácter legal" (Subrayamos)*

*"El juez de tutela no puede, entonces, remplazar a la autoridad competente para resolver aquello que le autoriza la ley, sino que su accionar es un medio de protección de derechos propios de la persona humana en su primacía. Por ello, no es pertinente como así ocurre en el presente asunto, formular la acción de tutela, por cuanto supone desconocer los medios ordinarios para dirimir controversias acerca de la titularidad de una pensión de jubilación..." (Sentencia T-038 de 1997, M.P. Hernándo Herrera Vergara.*

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencias T-549-02 y SU-879-00, se ha referido al tema relativo al reconocimiento de las pensiones por vía de tutela, señalando:

*"(...)El reconocimiento o la negativa de la susodicha prestación llevado a cabo con fundamento en la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley es asunto que compete a las autoridades administrativas obligadas, y su decisión puede ser recurrida por la vía gubernativa e impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, en principio, por la vía de la acción de tutela no es posible obtener el reconocimiento del derecho a la pensión. (...) "*

Así las cosas, tenemos que, el artículo 2° del Código de Procedimiento Laboral, modificado por la Ley 712 de 2001 en su artículo 2°, ha establecido en su numeral 4to que es del conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social lo siguiente:

"Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controvertan".

Se aprecia entonces que tratándose de una reclamación relativa al reconocimiento de una pensión de sobrevivencia, es claro que la parte actora cuenta con un instrumento judicial a través del procedimiento laboral ordinario preceptuado en la ley, para hacer valer sus pretensiones ante esa jurisdicción, ya que la misma acción versa sobre temas relacionados con la seguridad social integral y mas exactamente con el reconocimiento de un beneficio pensional.

Así pues, PORVENIR S.A. no ha vulnerado ni pretende vulnerar derechos fundamentales en cabeza de la accionante, por cuanto esta Sociedad Administradora **HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES LEGALES A SU CARGO.**

Dispone el Decreto 2591 de 1991 que procederá la acción de tutela aun cuando existan otros mecanismos de defensa judicial, sólo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso el juez impartirá una orden que permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado, quien cuenta con un término de cuatro (4) meses para ejercer dicha acción a partir del fallo de tutela.

La honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-796 del 12 de septiembre de 2003, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, señaló en cuanto a los alcances del concepto de perjuicio irremediable, lo siguiente:

*"Acerca del carácter irremediable del perjuicio, la jurisprudencia constitucional tiene establecido lo siguiente: En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Esto exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último las*

*medidas de protección deben ser impostergables, esto es que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.*

*En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable sino aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables \**

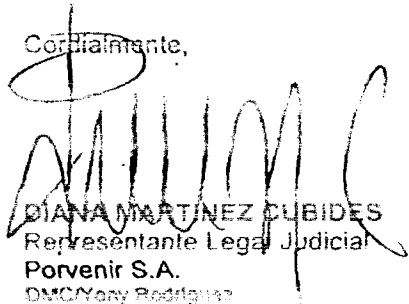
En el caso que nos ocupa es palmario que el accionante no allega una sola prueba tendiente a demostrar que se encuentra ad portas de sufrir un perjuicio de naturaleza irremediable; pues tal como se expresa en la jurisprudencia en cita, deben aportarse los elementos fácticos que indiquen el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados, por cuya razón la acción debe ser desestimada.

De acuerdo con las razones plasmadas es claro que PORVENIR S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, no ha vulnerado ningún derecho fundamental en cabeza de la accionante

Por las razones antes expuestas, de manera respetuosa solicito al despacho REVOCAR el fallo proferido en 1ª instancia para en su lugar denegar o declarar improcedente la pretendida acción de tutela en contra de PORVENIR S.A.

Quedamos a su disposición para suministrarle cualquier información adicional que considere necesaria

Cordialmente,

  
DIANA MARTÍNEZ CUBIDES  
Representante Legal Judicial  
Porvenir S.A.  
DMC Mary Rodríguez



0207412023923400

127

104

Bogotá D.C., 2017-03-23

Señor

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
MZ E CA 28 EL PARAISO  
TULUA  
VALLE

790 231 1/2

Ref. Rad. Porvenir: 0103872011802900

CC: 14798345

T.N.: 8814818

COR-BENEF

Porvenir S.A. le da un saludo cordial

En atención a su solicitud relacionada con el pago de intereses moratorios, le informamos lo siguiente:

El 3 de noviembre de 2016 esta Sociedad Administradora aprobó su pensión de invalidez toda vez que cumple con el requisito previsto en el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el art. 11, Ley 797 de 2003, modificado por el art. 1, Ley 860 de 2003 al contar con cincuenta (50) semanas de cotización al Sistema General de Pensiones a la fecha de estructuración. Cabe aclarar que, se computaron los periodos correspondientes a prestación de servicio militar en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Juzgado De Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple de Tulua-Valle.

No es procedente el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta que esta Sociedad Administradora desde el momento de la definición de su reclamación pensional de vejez invalidez, ha reconocido y pagado su mesada pensional asignada. Por otro lado, el 7 de febrero de 2017 se pagó retroactivo por valor de \$ 90.095.854, desde la fecha de estructuración es decir el 9 de enero de 2005 al mes de febrero de 2017.

Por lo anterior, no es procedente llevar a cabo el pago de los intereses moratorios de acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993

**ARTICULO. 141. -Intereses de mora. A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.**

128

0207412023923400

790 231 112

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.

04

**ORLANDO VALENCIA AGUDELO**  
Coordinación de Atención Integral a Clientes



129

104

Bogotá D.C., 2017-03-23

Señor

FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
MZ E CA 28 EL PARAISO  
TULUA  
VALLE

Ref. Rad. Porvenir: 0103872011802900

CC: 14798345

T.N: 8814818

COR-BENEF

Porvenir S.A. le da un saludo cordal

En atención a su solicitud relacionada con el pago de intereses moratorios, le informamos lo siguiente:

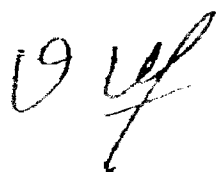
El 3 de noviembre de 2016 esta Sociedad Administradora aprobó su pensión de invalidez toda vez que cumple con el requisito previsto en el artículo 89 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 10, Ley 797 de 2003, modificado por el art. 1, Ley 880 de 2003 al contar con cincuenta (50) semanas de cotización al Sistema General de Pensiones a la fecha de estructuración. Cabe aclarar que, se computaron los periodos correspondientes a prestación de servicio militar en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Juzgado De Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple de Tulúa-Valle.

No es procedente el pago de intereses moratorios, teniendo en cuenta que esta Sociedad Administradora desde el momento de la definición de su reclamación pensional de vejez e invalidez, ha reconocido y pagado su mesada pensional asignada. Por otro lado, el 7 de febrero de 2017 se pagó retroactivo por valor de \$ 90.095.854, desde la fecha de estructuración es decir el 9 de enero de 2005 al mes de febrero de 2017.

Por lo anterior, no es procedente llevar a cabo el pago de los intereses moratorios de acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 1993:

**ARTICULO. 141. -Intereses de mora.** A partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para nosotros es muy importante haber atendido su solicitud.



ORLANDO VALENCIA AGUDELO  
Coordinación de Atención Integral a Clientes

547

18217  
018000517170

Bogotá, 04 de enero de 2018

Señor(a)  
**FABIO ALONSO ESPINOSA ALONSO**  
Delegado(a) N.A.  
jemiliog65@hotmail.com  
20895 171


Ref. Reg. Ponerse N.A.  
Solicitud por: N.A.  
CC: 14.798.345  
Afiliado: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
T.N. N.A.  
BEN - COR



Reciba un saludo cordial

En esta oportunidad queremos informarle que el pago de su mesada pensional de enero del 2018, se realizará el día 11 de mes, ya que debemos ajustar su mesada de acuerdo a los parámetros técnicos publicados por el Gobierno Nacional para el cálculo de la mesada.

Le acompañamos en cada momento y ponemos a su disposición para información adicional nuestra Línea de Servicio al Pensionado en Bogotá 3906881 y a nivel nacional sin costo 018000517170.

Cordialmente,

  
**LEONARDO REINOSO RENGIFO**  
Dirección de Servicio al Pensionado  
LRR/Yenny T.  
C.C. EXP. 70720  
FT-BE-020

 <p>Ramo Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p><b>JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE TULUA VALLE DEL CAUCA</b></p>		
<b>CLASE DE PROCESO</b>	ACCIÓN DE TUTELA		
<b>DEMANDANTE</b>	FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA		
<b>DEMANDADO:</b>	PORVENIR S.A		
<b>RADICACIÓN:</b>	76-834-41-89-001-2016-00329-00		
<b>ASUNTO:</b>	SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA		
<b>FECHA DE LA PROVIDENCIA:</b>	19 DE OCTUBRE DE 2016		
<b>RECURSOS:</b>	IMPUGNACIÓN		

### SENTENCIA DE TUTELA N° 190

#### I. -OBJETO DEL PROVEÍDO:

Resolver lo pertinente a la solicitud de amparo constitucional promovida por el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, quien actúa en nombre propio, contra PORVENIR S.A tendiente a amparar los derechos al MÍNIMO VITAL, la SALUD, la SEGURIDAD SOCIAL, la IGUALDAD y la VIDA EN CONDICIONE DIGNAS de las personas con DISCAPACIDAD

#### II. -FUNDAMENTOS DE HECHO

Refiere el accionante que: i) se encuentra afiliado al fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A; ii) presenta patología de SECUELAS DE HEMATOMA SUBDORAL AGUDO por motivo de accidente de tránsito ocurrido en julio de 2004 dejando COMO secuelas lesiones cerebrales, con crisis epilépticas, parálisis del lado izquierdo de su cuerpo con sordera total del mismo lado, hidrocefalia manejada con válvula de Hacking de manera permanente; iii) la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca le profirió como perdida de la capacidad laboral un porcentaje del 79.55 cuya fecha de estructuración corresponde al 09 de enero de 2015; iv) indica que cotizó al sistema de seguridad social en pensiones en dos periodos: uno de julio a diciembre de 2004 y otro en enero de 2005 lo que el fondo de pensiones indica que corresponde a 30 semanas; v) además según certificación del ejercito nacional, por haber prestado el servicio militar obligatorio entre los periodos de enero de 2002 y el 18 de noviembre de 2003 suma un periodo total de 22 meses y 18 días que representa 96.65 semanas, que se le suman las otras 30 semanas, arrojando un total de 126.65 semanas cotizadas; vi) dado la fecha de estructuración y las 50 semanas durante los últimos tres años, es merecedor de la pensión de invalidez, pues ya sumaría en ese tiempo 118.15 semanas, lo que supera y cumple en forma total con los requisitos; vii) por el continuo deterioro de su salud, el día 08 de marzo de 2015 radicó en el fondo de pensiones los documentos para acceder a su prestación, donde PORVENIR respondió que tan solo cotizó al sistema

general 25.71 semanas durante el tiempo exigido, por lo que no reúne los requisitos de las 50 semanas; viii) el 09 de septiembre de 2016 su apoderado se presentó en el fondo de pensiones PORVENIR de la ciudad de Cali para radicar la totalidad de los documentos que permitieran liquidar y pagar la pensión de invalidez, al respecto indicaron que la solicitud quedaba en suspenso hasta tanto el Ministerio de la Defensa Nacional no girara los valores del bono pensional a la entidad, posteriormente el citado fondo envía comunicación 104 de septiembre 22 de 2016 en donde niega el pago de la pensión de invalidez manifestando que el tiempo cotizado por el servicio militar obligatorio no cubre la contingencia de invalidez, sino la pensión por vejez amparándose en el artículo 40 de ley 48 de 1993; ix) el fondo de pensiones desconoció y violó el reconocimiento del estado de discapacidad y de debilidad manifiesta e indefensión al negar el acceso al mínimo vital, teniendo en cuenta que sus patologías son degenerativas, progresivas, catastróficas e incurables sin ningún pronóstico de vida; x) indica que su situación económica es de extrema pobreza, sobrevive de lo que le regalan las personas de buen corazón, tampoco posee bienes de ninguna índole.

### III. -PRETENSIONES DEL ACCIONANTE

- Solicita que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, la vida, la vida digna, teniendo en cuenta su situación de discapacidad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y el debido proceso.
- Se le ordene a PORVENIR S.A liquidar y pagar la pensión de invalidez en el menor tiempo posible.
- Que la prestación se haga efectiva a partir de la fecha de estructuración.

### IV. -ACTUACIÓN PROCESAL

-Una vez admitido el presente trámite constitucional de tutela, mediante auto No. 826 de fecha 05 de octubre de 2016, se corrió traslado a la entidad accionada. Se vinculó como tercero a la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

En escrito allegado el día 10 de octubre de 2016 solicita que se decrete medida provisional por ser una persona discapacitada, con una enfermedad de orden catastrófica, degenerativa y progresiva e incurable, sin ningún pronóstico de vida, ya que sus lesiones son irremediables y no tiene una calidad de vida debido a su padecimiento. Asimismo, carece del mínimo vital, y no tiene recursos para su mínima subsistencia.

-Mediante auto No. 885 del 14 de octubre de 2016 el juzgado no accede a la medida provisional por no reunir los presupuestos del artículo 7 del decreto 2591 de 1991, amén que debía ser objeto de análisis a la hora de tomar una decisión de fondo.

## V. PRONUNCIAMIENTOS OBTENIDOS

-Se recepcionó respuesta de la entidad accionada -12 de octubre de 2016- rubricada por la doctora DIANA MARTÍNEZ CUBIDES obrando en calidad de Directora de Litigios quien manifestó que la pensión de invalidez solicitada por el accionante no puede ser reclamada por vía de tutela, no solo porque existe otro medio de defensa judicial para reclamar como lo es por la especialidad de la materia la jurisdicción ordinaria laboral sino porque está plenamente demostrado que no se cumplieron con los requisitos señalados en la ley para generar el derecho a la pensión, haciendo inviable imponerle a esta sociedad administradora una obligación que la ley no ha establecido, pues se estaría incurriendo en una vía de hecho al ordenarse el pago claramente no contemplado ni ordenado legalmente.

Por otro lado, en cuanto los requisitos para adquirir una pensión de invalidez o sobrevivencia, el conceder prestaciones sin el lleno de los requisitos legales afecta el equilibrio financiero del sistema, por tratarse de un régimen contributivo se entiende que la prestación se encuentra financiada cuando se satisface el número mínimo de cotizaciones fijado por el legislador y que obedece a una racionalidad económica pensada en función del colectivo de asociados al sistema de seguridad social integral (sentencia 4167 del 07 octubre 2015).

El señor ESPINOSA OLAYA radicó solicitud de pensión de invalidez siendo verificada por la entidad respecto del cumplimiento de los requisitos contenidos en la Ley 860 de 2003, donde se demostró que no cumplió con los requisitos de las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración de invalidez (9 enero de 2002 a 9 de enero de 2005), por lo tanto Porvenir el 25 de febrero de 2005 informó al accionante el rechazo de la solicitud de pensión de invalidez, en consecuencia se le indicó que lo procedente respecto de su caso era la devolución de saldos.

Ahora bien, acogiendo lo anterior el accionante el 09/06/2016 aceptó la devolución de los saldos y solicitó el pago por cheque a través de la sucursal Tuluá.

El 19 de septiembre de 2016 el tutelante ejerció derecho de petición solicitando la reconsideración de la pensión de invalidez, siendo rechazada por la entidad el 22 del mismo mes y año, toda cuenta que no cumplía con los requisitos exigidos por la normatividad que regula tema.

Sumado lo anterior, indica que el tiempo de cotización en los tiempos servidos por parte del accionante a las Fuerzas Militares bajo el servicio militar obligatorio, por tratarse de un régimen exceptuado, no son computables como cotizaciones dentro del sistema general de pensiones (cita artículo 279 Ley 100 de 1993).

Los tiempos de servicio de una persona vinculada al régimen especial y exceptuado de las fuerzas militares no se constituyen como aportes válidos dentro del cubrimiento de la pensión de invalidez y sobrevivientes de los afiliados al RAIS, dichos tiempos no se pierden ya que se reconocen como bonos pensionales (Numeral 3.1 artículo 3 de la ley 923 de 2004). Asimismo, la entidad accionada refiere el artículo 40 de la ley 40 de 1993 (debe entenderse ley 48 de 1993) estos tiempos únicamente pueden computarse para

cesantías, pensión de jubilación por vejez y prima de antigüedad. Por lo tanto, considera que no han vulnerado derecho fundamental alguno.

Adicionalmente solicita la improcedencia de la acción de tutela por el requisito de la inmediatez y para ello cita abundante jurisprudencia del tema; lo anterior, teniendo en cuenta que según la accionada, han transcurrido más de 11 años de haberse rechazado la solicitud en comento.

-Se recibió respuesta de la entidad vinculada, JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ del Valle del Cauca el día 12 de octubre de 2016 por medio de la Doctora JULIETA BARCO LLANOS Directora Administrativa y Financiera quien manifiesta que el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA fue remitido por BBVA HORIZONTE para dirimir controversia de la patología, solicitud decidida mediante dictamen No. 0152-4931 de fecha 31 de enero de 2005, que se calificó: diagnóstico: trauma craneoencefálico con ruptura comunicante posterior para hidrocefalia y derivación ventrículo-peritoneal, secuela: hemiparesia izquierda, cuadro psicótico. PLC: 79.55%. Origen: Común. Fecha de estructuración: 09 enero de 2005. Notificado el dictamen en debida forma ninguna de las partes interpuso recurso, quedando en firme y ejecutoriado el 03 de marzo de 2005. En cuanto a las pretensiones indica que la junta no ha vulnerado derecho fundamental alguno y solicita declarar la improcedencia de su vinculación.

## VI. CONSIDERACIONES

El problema jurídico que este despacho entrará a resolver es si efectivamente se han vulnerado los derechos fundamentales del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** a LA SALUD, LA VIDA, LA VIDA DIGNA, teniendo en cuenta su situación de discapacidad, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO por parte de la administradora del fondo de pensiones y cesantías **PORVENIR S.A.** al no computar el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio y negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Para resolver lo planteado anteriormente se abordarán los siguientes temas: 1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar acreencias pensionales; 2. pensión de Invalidez; 3. tiempo y semanas cotizadas durante la prestación del servicio militar obligatorio; 4. estudio del caso concreto; y, por último, 5. se dispondrán las respectivas órdenes.

### 1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar acreencias pensionales

La acción tutela fue creada como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, por tanto, artículo 86 de la Constitución señala: *"toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública"*.

Igualmente el Decreto 2591 de 1991 indica que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Como mecanismo excepcional, por regla general se ha indicado que en cuanto a derechos y reconocimientos pensionales no es la vía judicial idónea ya que el mecanismo competente es la jurisdicción ordinaria laboral o la contenciosa administrativa según sea caso; pero, de manera excepcional la Corte ha señalado que la acción de tutela procede aun cuando existen otros medios de defensa judicial cuando se trate de personas que se encuentran en un estado de *debilidad manifiesta*, por razón de enfermedad, edad o cualquier otra causas, asimismo, cuando los medios ordinarios de defensa judicial carecen de idoneidad o eficacia, o porque se busca evitar la inminente consumación de un perjuicio irremediable, puede el juez constitucional estudiar de fondo la situación que se denuncia como violatoria de derechos fundamentales impostergables.

Ahora, en cuanto a la pensión de invalidez, su procedibilidad resulta injustificado agotar un trámite ordinario debido a las graves condiciones de salud de la persona y la situación precaria en que se encuentra sin los mínimos recursos que garanticen su subsistencia digna. La Corte ha sostenido que:

*"Considerados estos factores, el derecho a la pensión de invalidez adquiere el carácter de derecho fundamental por sí mismo, por tratarse de personas que por haber perdido parte considerable de su capacidad laboral, no pueden acceder al mercado de trabajo, de modo que dicha pensión se convierte en la única fuente de ingresos con la que cuentan para la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus familia, así como para proporcionarse los controles y tratamientos médicos requeridos. Esta penosa situación coloca a dichos individuos en un completo estado de indefensión y vulnerabilidad que hace indispensable la adopción de medidas urgentes para evitar la consumación de un perjuicio irremediable."* (Sentencia T653 de 2004, MP Marco Gerardo Monroy Cabra)

Asimismo, la Corte indica que la tutela es el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales como el mínimo vital, y demás derechos fundamentales del afectado por su incapacidad:

*"Tal es el caso del reconocimiento y pago de la pensión de Invalidez, cuando se acredita que la negativa afecta la vida en condiciones dignas de una persona que por su estado de incapacidad, requiere especial protección y asistencia del Estado para proteger el mínimo vital. En estos supuestos, la subsidiariedad de la acción de tutela es relativa, ya que según las circunstancias del caso, los medios ordinarios de defensa judicial pueden resultar absurdos para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales del afectado, en cuanto el trámite ordinario no propicia una solución expedita para colmar la garantía propia de una vida en condiciones dignas."* (Sentencia T 789 de 2014, MP. Martha Victoria Sáchica Méndez)

Conforme lo anterior, es necesario verificar cada caso en concreto y se valore las circunstancias de tal manera que su procedencia resulte excepcional; de igual manera, cuando se trate de sujetos de especial protección constitucional por debilidad manifiesta, tales como los niños, las mujeres en estado de gestación, los ancianos, las minorías étnicas o las personas con algún tipo de discapacidad, el juicio que debe hacer el juez constitucional de procedibilidad de la acción de tutela debe ser menos riguroso, debido que, al someter a estas personas a un trámite ordinario o



la afectación actual de los derechos fundamentales del tutelante producto del no reconocimiento de la prestación económica de invalidez.

## 2. Pensión de invalidez

Cuando la capacidad laboral de un individuo se ve disminuida a causa de una enfermedad laboral o un accidente de cualquier origen, el sistema de seguridad social debe garantizar las prestaciones asistenciales y económicas frente a una afectación en su estado de salud, asimismo, es necesario diferenciar el régimen aplicable a cada caso para determinar el origen de la enfermedad, que puede ser común o laboral; cuando se trata de una enfermedad común está a cargo del Fondo de Pensiones, y cuando se trata de origen laboral deben ser asumidas por la Administradora de Riesgos Laborales.

La Ley 100 de 1993 en el artículo 38 define el estado de invalidez en los siguientes términos: *Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.*

Asimismo, respecto de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez se enuncian de la siguiente manera:

**ARTICULO. 39.-** *Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:*

- a) *Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez,*
- b) *Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.*

Posteriormente, la Ley 100 de 1993 fue modificada mediante la ley 860 de 2003, el artículo 39 respecto de la pensión de invalidez quedo así:

**Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez.** *Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*

1. *Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.*

2. *Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-428 de 2009.*

Conforme lo anterior, la regla general para dar aplicabilidad de la normatividad se debe tener en cuenta la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, debiendo aplicarse la vigente en la mencionada fecha.

### 3. TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Respecto de las semanas cotizadas en función de la prestación del servicio militar obligatorio, la ley 48 de 1993, en su artículo 40 señala que:

*ARTICULO 40. Al término de la prestación del servicio militar. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tendrá los siguientes derechos:*

- a) En las entidades del Estado de cualquier orden, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley;8...)*

Teniendo en cuenta el precepto anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del cómputo de tiempo prestado para efectos pensionales, de la siguiente manera:

*"Sin embargo, de las consideraciones precedentes se tiene que el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 debe ser aplicado frente a pensiones que se rigen por el principio de cotización efectiva, en la medida en que si bien el principio de sostenibilidad financiera resulta central en la regulación del sistema de pensiones, no puede restringirse injustificadamente los derechos de los ciudadanos, por cuanto, se reitera que:*

*i) La prerrogativa prevista en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993 tiene una vocación de aplicación general y universal, por lo que cubre a todo ciudadano que haya prestado el servicio militar.*

*ii) No reconocer el tiempo de servicio militar para efectos pensionales cuando estos dependen de sus cotizaciones es una distinción cuyo origen subyace en el régimen pensional al cual se encuentra afiliada la persona, lo cual supondría una violación del derecho a la igualdad, pues se estaría otorgando un trato distinto, sin una razón objetiva y razonable que así lo justifique[56].*

*iii) El hecho de computar las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar, con el propósito de reconocer una pensión al amparo de lo previsto en la Ley 100 de 1993 o de otro régimen especial que exija la efectiva realización de una cotización (vía régimen de transición), supone la obligación a cargo de la Nación de realizar directamente el aporte al régimen pensional que haya sido elegido por el ciudadano." (Sentencia 510 de 2014 MP. Alberto Rojas Ríos) (negrilla fuera de texto)*

Asimismo, en la mencionada sentencia de tutela indica que:

*"En este orden de ideas, no cabe duda de que PROTECCIÓN S.A. vulneró los derechos fundamentales fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y a la vida en condiciones dignas del señor Dairo Anaya, por negarse a tener en cuenta las 124.41 semanas en las que prestó el servicio militar obligatorio, en los términos previstos en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, para efectos de reconocer su derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Dicha decisión, como previamente se explicó, le ha impedido al actor solventar directamente sus necesidades básicas, en especial en lo referente a los requerimientos que demanda su precaria situación de salud." (Negrilla fuera de texto)*

En reciente pronunciamiento de la Corte, en sentencia T 413 DE 2016 manifiesta la necesidad de contabilizar el tiempo para efecto del reconocimiento de pensiones y demás prestaciones:

"La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que "desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993." (MP. Alejandro Linares Cantillo)

Teniendo en cuenta los recientes pronunciamientos de la Corte en la materia, su principal argumento radica en el respeto al derecho a la igualdad, pues de igual manera indican que *"no existe una razón objetiva para excluir a las pensiones que se someten al principio de cotización efectiva del reconocimiento del tiempo prestado en el servicio militar conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993."* Por tanto, no se justifica restringir los derechos pensionales vulnerando los derechos fundamentales de las personas, ni lo es tampoco brindar un trato diferencial en cuanto al reconocimiento del tiempo de servicio militar porque no existe una justificación objetiva y razonable.

#### 4. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO

Según quedó expuesto en los hechos narrados y con fundamento en las anteriores consideraciones, se analizará si efectivamente se presentó la trasgresión a los derechos fundamentales del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA** a LA SALUD, LA VIDA, LA VIDA DIGNA teniendo en cuenta su situación de discapacidad, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, A LA IGUALDAD Y EL DEBIDO PROCESO por parte de la administradora del fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. al no computar el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio y negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Primeramente, es necesario tener en cuenta que en este caso en particular nos encontramos frente a una persona con una pérdida de la capacidad laboral correspondiente a un porcentaje del 79.55% con diagnóstico de *trauma craneoencefálico con ruptura comunicante posterior para hidrocefalia y derivación ventrículo peritoneal* (fl. 3) fundado en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca según oficio NT-04 – 054 del 31 de enero de 2005 (fl. 4 a 6), y que el mismo se encuentra debidamente ejecutoriado mediante oficio EJE-05-318 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2005 (FL. 2), por tanto, es considerado por el ordenamiento jurídico como sujeto de especial protección constitucional debido a su estado de debilidad manifiesta quien goza actualmente de un especial protección.

140  
... el accionante parece una enfermedad progresiva, sin evidencia de recuperación o restablecimiento de su salud, que lo coloca en un estado de debilidad y vulnerabilidad, además, se encuentra incapacitado para trabajar actualmente, lo que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva, por tanto no tiene una fuente propia de recursos económicos para su sostenimiento de sus necesidades básicas.

Asimismo, aunado al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, la junta indicó que la fecha de estructuración correspondía al día el 09 de enero de 2005, motivo por el cual el accionante le solicitó a BBVA HORIZONTE reconocer la pensión de invalidez, pero dicha petición fue negada por cuanto el señor ESPINOSA OLAYA no había cotizado las 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, sino que tenía cotizados desde enero del 2002 hasta enero del 2005 un total de 25.71 semanas sin cumplir el requisito de la ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez (Fls. 7 a 9).

Ante dicha negativa, y debido a su estado de salud, el actor pidió reconsideración a la entidad accionada el 19 de septiembre de 2016 para acceder a su pensión de invalidez, asimismo, solicitó que tuviera en cuenta el tiempo comprendido en el cual prestó el servicio militar obligatorio pero el 22 de septiembre de 2016 fue negada nuevamente, indicando que no se podía tener en cuenta este tiempo porque no son aportes válidos para pensiones de invalidez y sobrevivencia conforme lo estipula la Ley 48 de 1993, de igual manera le indican que tiene derecho respecto de esos tiempos al reconocimiento de bonos pensionales según lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 (fls. 20 a 22).

Se encuentra acreditado que el señor FABIO ALONSO ingresó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular el día 11 de enero de 2002 hasta el 16 de noviembre de 2003, según certificación expedida el día 22 de agosto de 2016 por el Ministerio de Defensa Nacional (historias laborales del ejército) (fls. 24 a 26). También se evidencia una solicitud de devolución de saldos de fecha 09 de junio de 2016 (fl. 311) la cual no se tramitara hasta tanto Ministerio de Defensa cancele a la entidad PORVENIR S.A el valor correspondiente de los aportes y se proceda a reconocer dichos periodos para ser computados nuevamente.

Contrastando las consideraciones jurisprudenciales con las particularidades del presente caso, encuentra este Despacho Judicial que guarda analogía y por ello impera prodigar aquí el mismo tratamiento de allá, por tanto, se ordenara computar las cotizaciones que bajo el servicio militar obligatorio realizó al sistema y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

En este orden de ideas, considera esta judicatura que **PORVENIR S.A** vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso, a la salud y a la vida en condiciones dignas del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**, por negarse a tener en cuenta las semanas en las que prestó el servicio militar obligatorio para efectos de reconocer su derecho a la pensión de invalidez, ya que tal decisión le ha impedido al accionante solventar sus necesidades básicas teniendo que estar todos estos años a la merced de quienes le ofrezcan algo para sobrevivir afectando de esta manera su mínimo vital y la vida en condiciones dignas, y en especial en lo referente a los requerimientos que aqueja su precaria situación de salud.

En consecuencia, se concederá el amparo deprecado para la protección de los derechos fundamentales instados por el del señor **FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA**; por lo tanto, se dispondrá que en el término de no mayor a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la perdida de la capacidad laboral.

Por lo anteriormente expuesto, EL JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley:

**V. -RESUELVE:**

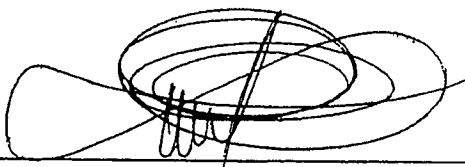
**PRIMERO: CONCEDER** la tutela de los derechos fundamentales a LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, AL DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA de condiciones civiles anotadas, incoada contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A, en cabeza de su representante legal, o quien haga sus veces.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A para que en el término no superior a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la perdida de la capacidad laboral.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** este Fallo a las partes por el medio más expedito y hágaseles saber, que contra la presente decisión procede el recurso de impugnación

**CUARTO.** En caso de no ser recurrida la presente decisión, envíese el expediente a La Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

  
\_\_\_\_\_  
**ALFONSO LEYVA MORENO**  
**JUEZ**

## REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA  
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  
TULUA, VALLE DEL CAUCA.

Acción de Tutela de Segunda Instancia Nro.254

Accionante: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA

Accionado: AFP PORVENIR S.A. y otros

Radicación: 768344189001-2016-00329-01 (2016-241)

Tuluá, Valle del Cauca, treinta (30) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016).

## I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Se decide la impugnación interpuesta por la AFP PORVENIR S.A., contra la decisión tomada en la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, Valle del Cauca, dentro del trámite de tutela en contra de la **AFP PORVENIR S. A.**

## II. ANTECEDENTES

### 1º. Lo que el accionante pretende.

El accionante actuando en nombre propio pretende que en sede de tutela se proteja los Derechos Fundamentales tales como a la salud, seguridad social, mínimo vital, la vida en condiciones dignas, el mínimo vital, y debido proceso, los cuales considera vulnerados por la AFP PORVENIR, por cuanto se ha negado a reconocerle la pensión de invalidez, argumentando que solo presenta 25.71 semanas cotizadas a la fecha de estructuración de la invalidez, o sea que no cumple con el requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

### 2º. Fundamentos de hecho

Los fundamentos de hecho plasmados en el escrito de tutela se resumen así:

- 1.- Que el actor se encuentra afiliado al fondo PORVENIR antes Horizonte.
- 2.- Que presenta secuelas por accidente de tránsito, ocurrido el 11 de julio de 2004; secuelas como: hidrocefalia manejada por válvula de HACKIM, con tubo que drena liquido desde el centro del cerebro hasta adentro de abdomen.



3.- Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, con sede en la ciudad de Cali, profirió calificación con pérdida de la capacidad laboral en porcentaje de 79.55, fecha de estructuración 9 de enero de 2005.

4.- Que cotizó al sistema en dos oportunidades, de julio a diciembre de 2004, y enero de 2005, que corresponde a 30 semanas.

5.- Que de acuerdo certificación del Ejército Nacional, del tiempo de prestación de servicio militar obligatorio del periodo comprendido entre el enero 2002 a noviembre de 2003, presenta 22 meses y 18 días, equivalen a 96.65 semanas, que sumadas a las cotizadas al fondo suman 126.6 semanas.

6.- Que como quiera que la norma establece que con fecha anterior a la estructuración de la invalidez, debe haberse cotizado 50 semanas durante los últimos tres años, considera que cumple con dicho requisito, pues a dicha fecha había cotizado 118.5 semanas.

7.- Que radicó los documentos ante el fondo de Pensiones Porvenir, el cual le respondió que el estudio demostró que había cotizado al sistema general de pensiones 25.71 semanas, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas.

8.- Que en el mes de agosto de 2016, su apoderado se presentó PORVENIR Cali, donde le fue informado que las semanas del servicio militar pagado si sumaban como aporte para el reconocimiento de pensión, y que debía además allegar carta de ejecutoria de la calificación de la Junta regional de Calificación y el certificado de bono pensional. Y fueron radicados en septiembre de 2016, donde le fue informado a su apoderado que la solicitud quedaba en suspenso hasta tanto el Ministerio de defensa girara los valores del bono pensional. Más tarde recibe comunicado de septiembre 22 de 2016, negándole el pago de la pensión de invalidez, alegando que el tiempo cotizado por el servicio militar obligatorio no cubría contingencia de invalidez sino pensión de vejez.

9.- Considera por ello que el fondo quebranta la normatividad vigente en relación a la seguridad social en Colombia como también los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional.

10.- Que sumado a lo anterior, desconoce los pronunciamientos de la Corte respecto de los principios constitucionales y la dignidad humana al no permitirle mejorar sus condiciones dado que sus padecimientos de salud son progresivos.

### III. ACTUACIÓN PROCESAL EN LA PRIMERA INSTANCIA.

La solicitud de tutela fue presentada el día 04 de Octubre de 2016, ante la Oficina de Apoyo Judicial local, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad, quien la admitió mediante proveído Nro.826 del 5 de Octubre del 2016, concediéndole el término de dos (2) días para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, tanto al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. como a los

vinculados JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS y al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Requirió al actor para que allegara prueba que justificara ordenar medida provisional.

Las entidades accionadas y vinculadas fueron enteradas mediante oficios que fueron remitidos a través del servicio de correo postal 472.

Frente a la medida provisional, el a-quo la denegó, considerando que no se cumplía con los requisitos del artículo 7° del decreto 2591 de 1991.

#### **PRONUNCIAMIENTO de FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**

Esta entidad mediante su apoderada judicial, manifestó que el actor no cumple con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, y que de ello fue enterado el actor en el año 2005, pues a la fecha de estructuración de su invalidez -9 de enero de 2005- no cumplía con el termino de cotización al sistema, esto es 50 semanas en los últimos tres años. Agrega, que el tiempo de prestación de servicio militar obligatoria no se puede computar dado que este hace parte de un régimen diferente y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 40 de 1993, solo se calcula para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad.

Menciona, que lo que procede en el caso del señor ESPINOSA OLAYA, es lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, esto es la devolución de saldos, y al respecto el actor radicó comunicado aceptando la devolución de saldos en el mes de junio de 2016, sin embargo con solicitud fechada 19 de septiembre solicita que se reconsidere el reconocimiento de su pensión de invalidez, ante lo cual le dio respuesta con comunicado fechado 22 de septiembre de 2016.

De otro lado, alega que en el caso en comento no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional, en atención al principio de inmediatez y subsidiaridad. En consecuencia, expresa que respecto del derecho de petición elevado se encuentra ante un hecho superado por haberse dado respuesta de fondo, y solicita se deniegue el amparo invocado por improcedencia de la acción constitucional.

#### **IV. FALLO IMPUGNADO.**

El A-quo, en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, resolvió: **"PRIMERO.- CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA... ORDENAR a la contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que en el término no superior a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral(...)"**

#### **V. LA IMPUGNACIÓN.**



Inconforme con lo decidido, la accionada AFP PORVENIR S.A. estando dentro del termino legal, el día 22 de Octubre de 2016 impugnó la decisión por considerar que no se ajusta a derecho, insistiendo en los argumentos expuestos en la contestación de la acción constitucional. Exponiendo además, que el actor no cumple con los requisitos señalados en la ley para acceder al derechos a la pensión, como tampoco, que la acción constitucional invocada, no cumple con los requisitos constitucionales para acceder al amparo, como son los principios de inmediatez y subsidiaridad, y que el actor no logró demostrar que estuviese ante un perjuicio irremediable, en consecuencia solicita que se revoque, se deniegue o declare improcedente.<sup>1</sup>

## VI. CONSIDERACIONES

Con el propósito de resolver lo concerniente con la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, se hace necesario tomar las siguientes determinaciones:

### a. Decisiones sobre validez y eficacia del proceso.

#### I. Competencia:

En primer lugar cabe destacar que se encuentra agotado todo el trámite procesal previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los Decretos reglamentarios 306 de 1992 y 1382 de julio 12 de 2000, para la acción de tutela, en lo concerniente a la primera instancia, y siendo competente este Juzgado, se debe proceder, en consecuencia, a proferir el fallo de mérito, en el presente asunto, al no observar causal de nulidad alguna que lo pueda afectar.

#### II. Eficacia del proceso:

En el presente caso se encuentran reunidos los requisitos señalados para emitir sentencia consistente en que la demanda se presentó en debida forma, la capacidad para ser partes está demostrada para ambas partes pues el accionante está legitimado para impetrar la acción como quiera que es el presunto afectado con la actuación de las entidades accionadas y éstas a su vez se encuentran legitimadas, por pasiva, como quiera que son las que presuntamente están afectando con su actuación los derechos reclamados por el accionante.

### b. Problema Jurídico a resolver:

El tema a decidir, en asuntos como el que nos ocupa, gira en torno a la vulneración o amenaza de uno o varios derechos fundamentales de una persona por parte de una acción u omisión de una autoridad privada. En el presente caso el objeto de la decisión se circunscribe a determinar si la decisión de primera instancia, tomada por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, de proteger los derechos fundamentales reclamados está o no ajustada a derecho, teniendo en cuenta que el actor alega que tiene derecho a que se

---

<sup>1</sup> Fl 1 y ss Cdo 2°

le compute el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio, a fin de que le sea reconocida la pensión de invalidez.

El Despacho sostendrá la tesis de que, en el presente caso, dadas las pretensiones, condiciones de salud del actor, y los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera procedente ordenar que se compute el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio, para que se defina si se cumple o no con los requisitos para que el actor pueda acceder al reconocimiento de su pensión de invalidez, en aras de proteger los derechos fundamentales invocados, esencialmente el derecho a la vida en condiciones dignas.

Para iniciar, se dirá que la acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El artículo 86 de la Carta establece que esta acción *"sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, se deduce que la procedencia de esta vía judicial está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado<sup>2</sup>.

Frente al tema de subsidiariedad, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia T-413 de 2016, conceptuó:

"...28. *Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable*[32].

Al respecto, la sentencia T-222 de 2014 manifestó: "[e]ste requisito de subsidiariedad implica, en otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios (Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta".

Acto seguido, la sentencia T-222 de 2014 al realizar el examen de subsidiariedad afirmó que dicho análisis no finaliza con corroborar la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino que además, implica verificar que dicho medio de defensa sea eficaz e idóneo, puesto que en caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales y, en consecuencia, evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La eficacia consiste en que el mecanismo judicial este "diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho"[33]. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa[34] competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando

<sup>2</sup> Sentencia T-983 de 2001.



"no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido."[35]

De acuerdo con los fundamentos de hecho que plantea el presente caso, la Sala considera que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social, en principio es la idónea para resolver la controversia que se plantea en el presente caso y determinar si el tiempo de duración de la prestación del servicio militar obligatorio, debe ser contabilizado como tiempo de servicio válido en el trámite de prestaciones sociales y si el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de invalidez.

En este sentido, la Ley 712 de 2001, mediante la cual se reformó el Código Procesal del Trabajo en el artículo 2, estableció:

"ARTÍCULO 2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (...) 4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (...)" (Subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se desprende que el ordenamiento jurídico previó un mecanismo judicial idóneo para resolver y brindar una solución integral al problema jurídico que plantea la situación fáctica relatada por el demandante. Sin embargo, como ya se advirtió, no basta con corroborar la existencia de un mecanismo de defensa judicial, sino que además es necesario que dicho mecanismo sea idóneo y eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el requisito de subsidiariedad se flexibiliza y la tutela se hace procedente cuando (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable[36]; y (iv) cuando, el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado[37].

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que los sujetos que merecen especial protección constitucional son, por ejemplo, menores de edad (Art. 44 C.P.), personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), y en estos casos "(...) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos y, por tanto, la acción de tutela debe proceder y ser concedida."[38]

En el presente caso se observa que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cuenta con los mecanismos previstos ante la jurisdicción competente para solicitarle a Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o la devolución de saldos teniendo en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio. Sin embargo, la Sala considera que la acción de tutela es procedente por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional al tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, además en este caso es posible inferir la afectación del derecho al mínimo vital debido a su condición de discapacidad, lo que supone una limitación para trabajar y procurarse sus necesidades básicas. De la misma forma, en el acervo probatorio del caso concreto, se evidencia que el actor ha llevado a cabo actividades administrativas para obtener la protección de los derechos.

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente caso, el requisito de subsidiariedad se satisfizo.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia citada anteladamente, se pronunció respecto del derecho a la pensión de invalidez y sus requisitos para su reconocimiento; así:

**"... LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS Y BENEFICIARIOS DE ESTE DERECHO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA**

30. Esta Corporación ha definido la pensión de invalidez como una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad[39]. Este derecho adquiere una connotación especial al buscar preservar los derechos de los sujetos de especial protección como las personas que tienen una disminución física, sensorial o psiquiátrica[40].
31. La Ley 100 de 1993 *"por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"*, en el capítulo III, regula lo relativo a la pensión de invalidez por riesgo común. En el 38 dispuso que se considera una persona inválida cuando por *"cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral"*.
32. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993[41], modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, estableció que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se requiere:
- "(i) haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.
  - "(ii) una fidelidad de cotización al sistema no menor al veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que la persona cumplió 20 años y la fecha de calificación de la invalidez.
- "PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
- "PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."
33. La Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 en la sentencia C-428 de 2009. En esta ocasión, estimó que el requisito de fidelidad de cotización al sistema -del 20% para el reconocimiento de la pensión de invalidez- contradecía el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre el cual se encuentra el derecho a la seguridad social. En virtud de lo anterior, la Sala Plena concluyó *"que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados inexecutable puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma"*. [42] Siguiendo la misma línea, la sentencia C-556 de 2009 declaró inexecutable los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que también establecían requisitos de fidelidad al sistema.
34. De conformidad con lo señalado previamente la disposición aplicable en la actualidad tiene el siguiente texto:
- "Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
- "1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.



"2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.

"Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."

En suma para acceder a la pensión de invalidez es necesario que el afiliado acredite una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. De forma particular, cuando el peticionario tiene 20 años o menos deberá demostrar que cotizó al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al suceso que le origina la invalidez y cuando haya cotizado el 75% de las semanas requeridas para la pensión de vejez solo necesitará acreditar que cotizó 25 semanas en los últimos 3 años.

#### E. EL TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE ACUMULARSE AL TIEMPO COTIZADO EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

35. La Ley 2 de 1945 *"por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa"*, en la sección II que versa sobre el retiro de oficiales y sus prestaciones, en el artículo 46 dispuso que el *"tiempo de servicio, para todos los efectos, se liquida a partir de la fecha del ingreso al Ejército, en cualquier grado, inclusive como soldados y los dos últimos años de permanencia en la Escuela Militar de Cadetes."* Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la disposición mencionada le reconocía a todos los integrantes de las fuerzas militares, incluso a los soldados, el derecho a contabilizar para el cálculo de la pensión de vejez el tiempo destinado a dicha labor, desde el mismo momento del ingreso[43]. La Ley 2 de 1945 fue derogada por la Ley 126 de 1959[44] y el Decreto Ley 2339 de 1971[45].

36. Posteriormente, el Decreto Ley 2400 de 1968[46], en el artículo 24, dispuso:

*"Cuando un empleado del servicio civil es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, sus condiciones como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirán ninguna alteración, quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a recibir remuneración. Terminado el servicio militar será reintegrado a su empleo. Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los empleados que sean llamados a prestar servicio militar obligatorio. (...)"* (Subrayado fuera del texto original).

El Decreto Ley 2400 de 1968 reglamentado por el Decreto 1950 de 1973[47], señaló en el artículo 101[48] que el tiempo de servicio militar debía ser tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad.

37. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 216 consagra la obligación de los colombianos de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo exijan. Las condiciones eximentes de la prestación del servicio militar, así como sus prerrogativas, serán previstas por la ley.

38. En desarrollo del mencionado mandato constitucional, la Ley 48 de 1993 que regula el servicio de reclutamiento y movilización, en su artículo 40 reza:

*"Artículo 40. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos:*

a. *En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; (...)"*

39. La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que *"desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

40. A su vez, la sentencia T-510 de 2014 estudio el caso de un ciudadano que tenía una pérdida de la capacidad laboral del 56.75% y solicitaba a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas durante la prestación del servicio militar obligatorio. Al respecto, dicha providencia aseveró que la Corte Constitucional había establecido que *"no existe una razón objetiva para excluir a las pensiones que se someten al principio de cotización efectiva del reconocimiento del tiempo prestado en el servicio militar conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

41. De igual manera, la sentencia T-739 de 2014, analizó una acción de tutela contra providencia judicial en la que concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso del actor por defecto sustantivo, puesto que en la sentencia reprochada se pasó por alto la normatividad aplicable al caso, esto es, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, según la cual, todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tiene derecho a que este tiempo le sea computado para efectos de pensión de jubilación y vejez. La Corte sostuvo que *"el beneficio en comento se traduce en el derecho de cualquier colombiano a que, habiendo prestado el servicio militar obligatorio y solicitado su derecho pensional ante una entidad pública, le sea tenido en cuenta ese tiempo como útil o válido para acceder a la pensión. Adicional a ello, esta Corte considera que en concordancia con el principio de favorabilidad, este beneficio se aplica, incluso, en los casos en los cuales la prestación del servicio militar se realizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma..."*

### CASO CONCRETO

Tenemos entonces, que del escrito de amparo constitucional el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, manifiesta que la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., se niega a reconocerle pensión de invalidez, alegando que a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral -9 de enero de 2005- no cumplía con el requisito legal de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. Que desconoce tanto los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional como su condición de salud, insistiendo en que lo que procede es la devolución de saldos. Agrega, que la accionada se niega a computar el tiempo cotizado en prestación del servicio militar obligatorio.

Revisado el expediente, se pudo comprobar que, efectivamente el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, fue calificado con pérdida de capacidad laboral en 79.55%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005. De acuerdo a la respuesta emitida por la accionada HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, hoy PORVENIR S.A, al actor, en oficio de respuesta a su solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, le manifestó que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, no había cotizado 50 semanas en los últimos tres años a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, que solo



contaba con 25.71 semanas, en consecuencia lo que procedía era la devolución de aportes.<sup>3</sup> De otro lado, a folio 25 obra certificado de información laboral en el cual se certifica que el actor prestó su servicio militar en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003.

De igual forma a folio 305 obra respuesta dada por la AFP PORVENIR S.A., mediante la cual frente a la nueva solicitud elevada por el actor de reconsiderar el reconocimiento de la pensión de invalidez, la accionada se sostiene en su teoría respecto al lleno de requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, agregando que el tiempo de servicio como miembro de las Fuerzas Militares, no se computan por tratarse de un régimen especial exceptuado, y no se constituyen en aportes válidos para el reconocimiento de pensión de invalidez y sobrevivientes y que solo aplican para la expedición de bonos pensionales, y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, dichos tiempos solo pueden computarse para pensión de jubilación por vejez.

Igualmente, revisado el expediente se observa que el actor probó, ser sujeto de especial protección, pues no solo la calificación de pérdida de capacidad laboral lo confirma, sino su historia clínica en la cual se puede apreciar que como consecuencia del accidente sufrido, viene padeciendo, un conjunto de padecimientos que disminuyen su salud, y peor aún, su calidad de vida, sumado a que en su escrito de solicitud de amparo, manifiesta no contar con los recursos económicos, por lo que se ha visto disminuido su calidad de vida, y afectación al mínimo vital.

Ahora bien, teniendo en cuenta, los argumentos expuestos por la accionada, respecto del incumplimiento de los principio que rigen la acción de tutela, tenemos, que de acuerdo a la controversia suscitada entre el actor y la accionada, esto es la determinación de si para el reconocimiento de pensión de invalidez cuenta o no, el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, a fin de cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez, acertadamente es la jurisdicción ordinaria-laboral, la llamada a resolverlo, pues es el mecanismo judicial idóneo, sin embargo no basta con reconocer la existencia de dicho mecanismo, sino que se además idóneo y eficaz, ante lo cual la Corte ha dispuesto que este requisito se flexibiliza y se hace procedente cuando : "... (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable[36]; y (iv) cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado..."

Así las cosas, tenemos que en el presente caso, tales condiciones se cumplen, pues efectivamente el señor ESPINOSA OLAYA, i) es persona de especial condición, dada su discapacidad y condición de salud; ii) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos, dado los términos prolongados que conlleva la solución de estos conflictos. iii) Dada las condiciones de salud del actor y la falta de recursos, lo que le hace aún más vulnerable, pues su deterioro es progresivo, lo que además le impide

---

<sup>3</sup> Fl 7 y ss Cdo ppal

solventarse por sus propios medios y iv) el actor, pese a sus múltiples limitaciones físicas y de salud, no ha desistido de reclamar el reconocimiento de pensión de invalidez, lo cual prueba su diligencia en busca de que se le reconozca el derecho alegado. Con lo previamente citado, se pueden concluir que dada la calidad del actor, en este caso se considera procedente reclamar por esta vía constitucional, un derecho prestacional.

Ahora bien, siendo procedente esta acción, se procederá a determinar si la decisión del A-quo estuvo conforme a las normas y pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expresado por la accionada, es evidente que el actor cumple con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el cual establece que tendrán derecho a la pensión de invalidez las personas que tengan una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya, cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sumado a que el actor le fue calificada pérdida de capacidad laboral en 79.55%.

De acuerdo con los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera que el objetivo de la pensión de invalidez, es asegurar que las personas cuya capacidad laboral se ve disminuida reciban una compensación económica como una fuente de ingreso que les sirva para llevar una vida en condiciones dignas, y para lograr tal objetivo es indispensable que se cumpla con los requisitos plurimencionados en este proveído.

De otra parte, frente al argumento de la accionada, quien asevera que el actor, no cumple con los términos de cotización esto es las cincuenta semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, tenemos que en el caso en comento de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, tienen derecho las personas que hayan prestado el servicio militar obligatorio a que dicho tiempo les sea computado para efectos pensionales, entre otras prestaciones económicas. La anterior disposición cuenta con fundamento constitucional en el artículo 216 de la Carta.

En el caso concreto, el actor solicitó que le sea tenido en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual de acuerdo al material probatorio se evidencia que el señor ESPINOSA OLAYA, del 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003, prestó el servicio militar obligatorio. Posteriormente, tuvo un accidente de origen común que le causó una pérdida de la capacidad laboral del 79.550%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005, ante lo cual es evidente que en los tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, se habían cotizado 50 semanas.

Por todo lo anterior, comparte este despacho judicial, la decisión tomada por el Juzgado de primera instancia, al tutelar los derechos invocados y en consecuencia ordenar a la AFP PORVENIR S.A., generar una nueva historia laboral, anterior a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, en la que se compute el término, cotizado bajo la prestación del servicio militar obligatorio.



En conclusión, al vislumbrarse vulneración a los derechos del accionante, la titular de este estrado judicial procederá a confirmar la decisión adoptada en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Pequeñas Causas y Competencia múltiple de Tuluá, Valle del Cauca.

## VII. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, obrando como Juez Constitucional de Tutela, administrando Justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

### RESUELVE:

**PRIMERO. CONFIRMAR** la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple de ésta localidad. De conformidad a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

**SEGUNDO.** Por secretaría NOTIFICAR a las partes el presente fallo por el medio más expedito (Art. 30 Decreto 2591/91).

**TERCERO. ORDENASE** la remisión de las presentes diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
SANDRA LETICIA SUA VILLEGAS  
Jueza

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
DISTRITO JUDICIAL DE BUGA  
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  
TULUA, VALLE DEL CAUCA.

Acción de Tutela de Segunda Instancia Nro. 254

Accionante: FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA  
Accionado: AFP PORVENIR S.A. y otros  
Radicación: 768344189001-2016-00329-01 (2016-241)

Tuluá, Valle del Cauca, treinta (30) de Noviembre de dos mil dieciséis (2016).

**I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO**

Se decide la impugnación interpuesta por la AFP PORVENIR S.A., contra la decisión tomada en la Sentencia Nro. 190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, Valle del Cauca, dentro del trámite de tutela en contra de la **AFP PORVENIR S. A.**

**II. ANTECEDENTES****1º. Lo que el accionante pretende.**

El accionante actuando en nombre propio pretende que en sede de tutela se proteja los Derechos Fundamentales tales como a la salud, seguridad social, mínimo vital, la vida en condiciones dignas, el mínimo vital, y debido proceso, los cuales considera vulnerados por la AFP PORVENIR, por cuanto se ha negado a reconocerle la pensión de invalidez, argumentando que solo presenta 25.71 semanas cotizadas a la fecha de estructuración de la invalidez, o sea que no cumple con el requisito establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

**2º. Fundamentos de hecho**

Los fundamentos de hecho plasmados en el escrito de tutela se resumen así:

1.- Que el actor se encuentra afiliado al fondo PORVENIR antes Horizonte.

2.- Que presenta secuelas por accidente de tránsito, ocurrido el 11 de julio de 2004; secuelas como: hidrocefalia manejada por válvula de HACKIM, con tubo que drena liquido desde el centro del cerebro hasta adentro de abdomen.

3.- Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, con seden en la ciudad de Cali, profirió calificación con pérdida de la capacidad laboral en porcentaje de 79.55, fecha de estructuración 9 de enero de 2005.

4.- Que cotizó al sistema en dos oportunidades, de julio a diciembre de 2004, y enero de 2005, que corresponde a 30 semanas.

5.- Que de acuerdo certificación del Ejército Nacional, del tiempo de prestación de servicio militar obligatorio del periodo comprendido entre el enero 2002 a noviembre de 2003, presenta 22 meses y 18 días, equivalen a 96.65 semanas, que sumadas a las cotizadas al fondo suman 126.6 semanas.

6.- Que como quiera que la norma establece que con fecha anterior a la estructuración de la invalidez, debe haberse cotizado 50 semanas durante los últimos tres años, considera que cumple con dicho requisito, pues a dicha fecha había cotizado 118.5 semanas.

7.- Que radicó los documentos ante el fondo de Pensiones Porvenir, el cual le respondió que el estudio demostró que había cotizado al sistema general de pensiones 25.71 semanas, por lo que no reúne el requisito de las 50 semanas.

8.-Que en el mes de agosto de 2016, su apoderado se presentó PORVENIR Cali, donde le fue informado que las semanas del servicio militar pagado si sumaban como aporte para el reconocimiento de pensión, y que debía además allegar carta de ejecutoria de la calificación de la Junta regional de Calificación y el certificado de bono pensional. Y fueron radicados en septiembre de 2016, donde le fue informado a su apoderado que la solicitud quedaba en suspenso hasta tanto el Ministerio de defensa girara los valores del bono pensional. Más tarde recibe comunicado de septiembre 22 de 2016, negándole el pago de la pensión de invalidez, alegando que el tiempo cotizado por el servicio militar obligatorio no cubría contingencia de invalidez sino pensión de vejez.

9.- Considera por ello que el fondo quebranta la normatividad vigente en relación a la seguridad social en Colombia como también los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional.

10.- Que sumado a lo anterior, desconoce los pronunciamientos de la Corte respecto de los principios constitucionales y la dignidad humana al no permitirle mejorar sus condiciones dado que sus padecimientos de salud son progresivos.

### III. ACTUACIÓN PROCESAL EN LA PRIMERA INSTANCIA.

La solicitud de tutela fue presentada el día 04 de Octubre de 2016, ante la Oficina de Apoyo Judicial local, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esta ciudad, quien la admitió mediante proveído Nro.826 del 5 de Octubre del 2016, concediéndole el término de dos (2) días para que se pronunciara respecto de los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, tanto al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. como a los

vinculados JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS y al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Requirió al actor para que allegara prueba que justificara ordenar medida provisional.

Las entidades accionadas y vinculadas fueron enteradas mediante oficios que fueron remitidos a través del servicio de correo postal 472.

Frente a la medida provisional, el a-quo la denegó, considerando que no se cumplía con los requisitos del artículo 7º del decreto 2591 de 1991.

#### PRONUNCIAMIENTO de FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

Esta entidad mediante su apoderada judicial, manifestó que el actor no cumple con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, y que de ello fue enterado el actor en el año 2005, pues a la fecha de estructuración de su invalidez -9 de enero de 2005- no cumplía con el termino de cotización al sistema, esto es 50 semanas en los últimos tres años. Agrega, que el tiempo de prestación de servicio militar obligatoria no se puede computar dado que este hace parte de un régimen diferente y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 40 de 1993, solo se calcula para efectos de cesantías, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad.

Menciona, que lo que procede en el caso del señor ESPINOSA OLAYA, es lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, esto es la devolución de saldos, y al respecto el actor radicó comunicado aceptando la devolución de saldos en el mes de junio de 2016, sin embargo con solicitud fechada 19 de septiembre solicita que se reconsidere el reconocimiento de su pensión de invalidez, ante lo cual le dio respuesta con comunicado fechado 22 de septiembre de 2016.

De otro lado, alega que en el caso en comento no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional, en atención al principio de inmediatez y subsidiaridad. En consecuencia, expresa que respecto del derecho de petición elevado se encuentra ante un hecho superado por haberse dado respuesta de fondo, y solicita se deniegue el amparo invocado por improcedencia de la acción constitucional.

#### IV. FALLO IMPUGNADO.

El A-quo, en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, resolvió: *"PRIMERO.- CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO, A LA SALUD Y LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, del señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA... ORDENAR a la contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. para que en el término no superior a 20 días proceda a COMPUTAR las cotizaciones bajo el servicio militar obligatorio y generar una nueva historia laboral de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral(...)"*

#### V. LA IMPUGNACIÓN.



Inconforme con lo decidido, la accionada AFP PORVENIR S.A. estando dentro del termino legal, el día 22 de Octubre de 2016 impugnó la decisión por considerar que no se ajusta a derecho, insistiendo en los argumentos expuestos en la contestación de la acción constitucional. Exponiendo además, que el actor no cumple con los requisitos señalados en la ley para acceder al derechos a la pensión, como tampoco, que la acción constitucional invocada, no cumple con los requisitos constitucionales para acceder al amparo, como son los principios de inmediatez y subsidiaridad, y que el actor no logró demostrar que estuviese ante un perjuicio irremediable, en consecuencia solicita que se revoque, se deniegue o declare improcedente.<sup>1</sup>

## VI. CONSIDERACIONES

Con el propósito de resolver lo concerniente con la impugnación presentada contra el fallo de primera instancia, se hace necesario tomar las siguientes determinaciones:

### a. Decisiones sobre validez y eficacia del proceso.

#### I. Competencia:

En primer lugar cabe destacar que se encuentra agotado todo el trámite procesal previsto en el Decreto 2591 de 1991 y en los Decretos reglamentarios 306 de 1992 y 1382 de julio 12 de 2000, para la acción de tutela, en lo concerniente a la primera instancia, y siendo competente este Juzgado, se debe proceder, en consecuencia, a proferir el fallo de mérito, en el presente asunto, al no observar causal de nulidad alguna que lo pueda afectar.

#### II. Eficacia del proceso:

En el presente caso se encuentran reunidos los requisitos señalados para emitir sentencia consistente en que la demanda se presentó en debida forma, la capacidad para ser partes está demostrada para ambas partes pues el accionante está legitimado para impetrar la acción como quiera que es el presunto afectado con la actuación de las entidades accionadas y éstas a su vez se encuentran legitimadas, por pasiva, como quiera que son las que presuntamente están afectando con su actuación los derechos reclamados por el accionante.

### b. Problema Jurídico a resolver:

El tema a decidir, en asuntos como el que nos ocupa, gira en torno a la vulneración o amenaza de uno o varios derechos fundamentales de una persona por parte de una acción u omisión de una autoridad privada. En el presente caso el objeto de la decisión se circunscribe a determinar si la decisión de primera instancia, tomada por el Juez de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tuluá, de proteger los derechos fundamentales reclamados está o no ajustada a derecho, teniendo en cuenta que el actor alega que tiene derecho a que se

---

<sup>1</sup> Fl 1 y ss Cdo 2º

le compute el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio, a fin de que le sea reconocida la pensión de invalidez.

El Despacho sostendrá la tesis de que, en el presente caso, dadas las pretensiones, condiciones de salud del actor, y los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera procedente ordenar que se compute el tiempo de prestación de servicio militar obligatorio, para que se defina si se cumple o no con los requisitos para que el actor pueda acceder al reconocimiento de su pensión de invalidez, en aras de proteger los derechos fundamentales invocados, esencialmente el derecho a la vida en condiciones dignas.

Para iniciar, se dirá que la acción de tutela se creó como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. El artículo 86 de la Carta establece que esta acción *"sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*. Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, se deduce que la procedencia de esta vía judicial está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias con que cuente el interesado<sup>2</sup>.

Frente al tema de subsidiariedad, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia T-413 de 2016, conceptuó:

*"...28. Subsidiariedad: Sobre la base de lo dispuesto en los numerales 23 y 24 de esta providencia, la subsidiariedad se deriva del carácter excepcional, preferente y sumario que tiene la acción de tutela, el cual le impone al ciudadano la obligación de acudir a los mecanismos judiciales antes de invocar la protección de los derechos fundamentales a través de la tutela, salvo que de no invocarse se presente la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual para ser tal exige que sea inminente, grave, que requiera medidas urgentes de protección y que la acción de tutela sea impostergable[32]."*

Al respecto, la sentencia T-222 de 2014 manifestó: *"[e]ste requisito de subsidiariedad implica, en otros términos, que el amparo constitucional procede siempre y cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que la tutela no se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras instancias. Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en efecto tiene que suceder, ser los principales guardianes y defensores de los derechos fundamentales de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son los jueces ordinarios (Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta"*.

Acto seguido, la sentencia T-222 de 2014 al realizar el examen de subsidiariedad afirmó que dicho análisis no finaliza con corroborar la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sino que además, implica verificar que dicho medio de defensa sea eficaz e idóneo, puesto que en caso de no serlo, la acción de tutela será el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales y, en consecuencia, evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La eficacia consiste en que el mecanismo judicial este *"diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho"[33]*. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o administrativa[34] competente, tenga la virtualidad de garantizarle al solicitante oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción judicial es inidónea, cuando

<sup>2</sup> Sentencia T-983 de 2001.



"no permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido."[35]

De acuerdo con los fundamentos de hecho que plantea el presente caso, la Sala considera que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social, en principio es la idónea para resolver la controversia que se plantea en el presente caso y determinar si el tiempo de duración de la prestación del servicio militar obligatorio, debe ser contabilizado como tiempo de servicio válido en el trámite de prestaciones sociales y si el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cumple con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de invalidez.

En este sentido, la Ley 712 de 2001, mediante la cual se reformó el Código Procesal del Trabajo en el artículo 2, estableció:

"ARTÍCULO 2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: "ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: (...) 4. Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan (...)". (Subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se desprende que el ordenamiento jurídico previó un mecanismo judicial idóneo para resolver y brindar una solución integral al problema jurídico que plantea la situación fáctica relatada por el demandante. Sin embargo, como ya se advirtió, no basta con corroborar la existencia de un mecanismo de defensa judicial, sino que además es necesario que dicho mecanismo sea idóneo y eficaz.

Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que el requisito de subsidiariedad se flexibiliza y la tutela se hace procedente cuando (i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable[36]; y (iv) cuando, el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado[37].

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha entendido que los sujetos que merecen especial protección constitucional son, por ejemplo, menores de edad (Art. 44 C.P.), personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), y en estos casos "(...) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos y, por tanto, la acción de tutela debe proceder y ser concedida."[38]

En el presente caso se observa que el señor Roberto Belarmino Piedrahita Henao cuenta con los mecanismos previstos ante la jurisdicción competente para solicitarle a Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o la devolución de saldos teniendo en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio. Sin embargo, la Sala considera que la acción de tutela es procedente por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional al tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, además en este caso es posible inferir la afectación del derecho al mínimo vital debido a su condición de discapacidad, lo que supone una limitación para trabajar y procurarse sus necesidades básicas. De la misma forma, en el acervo probatorio del caso concreto, se evidencia que el actor ha llevado a cabo actividades administrativas para obtener la protección de los derechos.

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente caso, el requisito de subsidiariedad se satisfizo.

La Honorable Corte Constitucional en la Sentencia citada anteladamente, se pronunció respecto del derecho a la pensión de invalidez y sus requisitos para su reconocimiento; así:

**"... LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, REQUISITOS Y BENEFICIARIOS DE ESTE DERECHO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA**

30. Esta Corporación ha definido la pensión de invalidez como una compensación económica tendiente a resguardar las necesidades básicas de aquellas personas cuya capacidad laboral se ve disminuida, como una fuente de ingreso para solventar una vida en condiciones de dignidad[39]. Este derecho adquiere una connotación especial al buscar preservar los derechos de los sujetos de especial protección como las personas que tienen una disminución física, sensorial o psiquiátrica[40].

31. La Ley 100 de 1993 *"por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"*, en el capítulo III, regula lo relativo a la pensión de invalidez por riesgo común. En el 38 dispuso que se considera una persona inválida cuando por *"cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral"*.

32. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993[41], modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, estableció que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se requiere:

"(i) haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.

"(ii) una fidelidad de cotización al sistema no menor al veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que la persona cumplió 20 años y la fecha de calificación de la invalidez.

"PARÁGRAFO 1o. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

"PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."

33. La Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 en la sentencia C-428 de 2009. En esta ocasión, estimó que el requisito de fidelidad de cotización al sistema -del 20% para el reconocimiento de la pensión de invalidez- contradecía el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre el cual se encuentra el derecho a la seguridad social. En virtud de lo anterior, la Sala Plena concluyó *"que el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados inexecutable puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma"*. [42] Siguiendo la misma línea, la sentencia C-556 de 2009 declaró inexecutable los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que también establecían requisitos de fidelidad al sistema.

34. De conformidad con lo señalado previamente la disposición aplicable en la actualidad tiene el siguiente texto:

"Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

"1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.



"2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.

"Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."

En suma para acceder a la pensión de invalidez es necesario que el afiliado acredite una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. De forma particular, cuando el peticionario tiene 20 años o menos deberá demostrar que cotizó al menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al suceso que le origino la invalidez y cuando haya cotizado el 75% de las semanas requeridas para la pensión de vejez solo necesitará acreditar que cotizó 25 semanas en los últimos 3 años.

#### E. EL TIEMPO Y SEMANAS COTIZADAS DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO DEBE ACUMULARSE AL TIEMPO COTIZADO EN EL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

35. La Ley 2 de 1945 *"por la cual se reorganiza la carrera de Oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de Guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones sociales a los individuos de tropa"*, en la sección II que versa sobre el retiro de oficiales y sus prestaciones, en el artículo 46 dispuso que el *"tiempo de servicio, para todos los efectos, se liquida a partir de la fecha del ingreso al Ejército, en cualquier grado, inclusive como soldados y los dos últimos años de permanencia en la Escuela Militar de Cadetes."* Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la disposición mencionada le reconocía a todos los integrantes de las fuerzas militares, incluso a los soldados, el derecho a contabilizar para el cálculo de la pensión de vejez el tiempo destinado a dicha labor, desde el mismo momento del ingreso[43]. La Ley 2 de 1945 fue derogada por la Ley 126 de 1959[44] y el Decreto Ley 2339 de 1971[45].

36. Posteriormente, el Decreto Ley 2400 de 1968[46], en el artículo 24, dispuso::

*"Cuando un empleado del servicio civil es llamado a prestar el servicio militar obligatorio, sus condiciones como empleado en el momento de ser llamado a filas no sufrirán ninguna alteración, quedará exento de todas las obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a recibir remuneración. Terminado el servicio militar será reintegrado a su empleo. Para efectos de cesantía y pensión de retiro no se considera interrumpido el trabajo de los empleados que sean llamados a prestar servicio militar obligatorio. (...)"*(Subrayado fuera del texto original).

El Decreto Ley 2400 de 1968 reglamentado por el Decreto 1950 de 1973[47], señaló en el artículo 101[48] que el tiempo de servicio militar debía ser tenido en cuenta para efectos de cesantía, pensión de jubilación o de vejez y prima de antigüedad.

37. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 216 consagra la obligación de los colombianos de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo exijan. Las condiciones eximentes de la prestación del servicio militar, así como sus prerrogativas, serán previstas por la ley.

38. En desarrollo del mencionado mandato constitucional, la Ley 48 de 1993 que regula el servicio de reclutamiento y movilización, en su artículo 40 reza:

*"Artículo 40. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos:*

a. *En las entidades del Estado de cualquier orden el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación, de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley; (...)"*.

39. La sentencia T-063 de 2013 analizó el caso de una persona con más de setenta años de edad y con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, a quien el ISS no le tenía en cuenta el tiempo correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio. En este caso, la Corte le ordenó a la accionada liquidar y pagar la pensión de vejez incluyendo las semanas correspondientes a la prestación del servicio militar obligatorio. Después de analizar las normas que establecen los beneficios para las personas que prestaron el servicio militar obligatorio concluyó que *"desde el año de 1945 se estableció un régimen de carácter legal y reglamentario, en el que se reconoce la obligación de tener en cuenta el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio para el cálculo de varias prestaciones sociales, entre ellas la pensión de vejez. Este régimen se mantuvo con la expedición de la Constitución Política de 1991, en la que se dispuso el deber del legislador de reconocer prerrogativas a quienes prestan dicho servicio y así se consagró en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

40. A su vez, la sentencia T-510 de 2014 estudio el caso de un ciudadano que tenía una pérdida de la capacidad laboral del 56.75% y solicitaba a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas durante la prestación del servicio militar obligatorio. Al respecto, dicha providencia aseveró que la Corte Constitucional había establecido que *"no existe una razón objetiva para excluir a las pensiones que se someten al principio de cotización efectiva del reconocimiento del tiempo prestado en el servicio militar conforme al artículo 40 de la Ley 48 de 1993."*

41. De igual manera, la sentencia T-739 de 2014, analizó una acción de tutela contra providencia judicial en la que concluyó que se vulneró el derecho al debido proceso del actor por defecto sustantivo, puesto que en la sentencia reprochada se pasó por alto la normatividad aplicable al caso, esto es, el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, según la cual, todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio, tiene derecho a que este tiempo le sea computado para efectos de pensión de jubilación y vejez. La Corte sostuvo que *"el beneficio en comento se traduce en el derecho de cualquier colombiano a que, habiendo prestado el servicio militar obligatorio y solicitado su derecho pensional ante una entidad pública, le sea tenido en cuenta ese tiempo como útil o válido para acceder a la pensión. Adicional a ello, esta Corte considera que en concordancia con el principio de favorabilidad, este beneficio se aplica, incluso, en los casos en los cuales la prestación del servicio militar se realizó con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma..."*

### CASO CONCRETO

Tenemos entonces, que del escrito de amparo constitucional el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, manifiesta que la Administradora de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., se niega a reconocerle pensión de invalidez, alegando que a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral -9 de enero de 2005- no cumplía con el requisito legal de haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración. Que desconoce tanto los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional como su condición de salud, insistiendo en que lo que procede es la devolución de saldos. Agrega, que la accionada se niega a computar el tiempo cotizado en prestación del servicio militar obligatorio.

Revisado el expediente, se pudo comprobar que, efectivamente el señor FABIO ALONSO ESPINOSA OLAYA, fue calificado con pérdida de capacidad laboral en 79.55%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005. De acuerdo a la respuesta emitida por la accionada HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, hoy PORVENIR S.A, al actor, en oficio de respuesta a su solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, le manifestó que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, no había cotizado 50 semanas en los últimos tres años a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, que solo



contaba con 25.71 semanas, en consecuencia lo que procedía era la devolución de aportes.<sup>3</sup> De otro lado, a folio 25 obra, certificado de información laboral en el cual se certifica que el actor prestó su servicio militar en el periodo comprendido entre el 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003.

De igual forma a folio 305 obra respuesta dada por la AFP PORVENIR S.A., mediante la cual frente a la nueva solicitud elevada por el actor de reconsiderar el reconocimiento de la pensión de invalidez, la accionada se sostiene en su teoría respecto al lleno de requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, agregando que el tiempo de servicio como miembro de las Fuerzas Militares, no se computan por tratarse de un régimen especial exceptuado, y no se constituyen en aportes válidos para el reconocimiento de pensión de invalidez y sobrevivientes y que solo aplican para la expedición de bonos pensionales, y que de acuerdo al artículo 40 de la Ley 48 de 1993, dichos tiempos solo pueden computarse para pensión de jubilación por vejez.

Igualmente, revisado el expediente se observa que el actor probó, ser sujeto de especial protección, pues no solo la calificación de pérdida de capacidad laboral lo confirma, sino su historia clínica en la cual se puede apreciar que como consecuencia del accidente sufrido, viene padeciendo, un conjunto de padecimientos que disminuyen su salud, y peor aún, su calidad de vida, sumado a que en su escrito de solicitud de amparo, manifiesta no contar con los recursos económicos, por lo que se ha visto disminuido su calidad de vida, y afectación al mínimo vital.

Ahora bien, teniendo en cuenta, los argumentos expuestos por la accionada, respecto del incumplimiento de los principio que rigen la acción de tutela, tenemos, que de acuerdo a la controversia suscitada entre el actor y la accionada, esto es la determinación de si para el reconocimiento de pensión de invalidez cuenta o no, el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, a fin de cumplir con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez, acertadamente es la jurisdicción ordinaria-laboral, la llamada a resolverlo, pues, es el mecanismo judicial idóneo, sin embargo no basta con reconocer la existencia de dicho mecanismo, sino que se además idóneo y eficaz, ante lo cual la Corte ha dispuesto que este requisito se flexibiliza y se hace procedente cuando : "...*(i) el beneficiario de la pensión es un sujeto de especial protección constitucional; (ii) pese a existir mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos invocados, estos no son idóneos para proteger los derechos fundamentales invocados; (iii) si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo resulta evidente la configuración de un perjuicio irremediable*[36]; y *(iv) cuando el actor ha acreditado un mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente conculcado, la afectación de su mínimo vital como consecuencia de la negativa pensional, y una meridiana convicción sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado...*"

Así las cosas, tenemos que en el presente caso, tales condiciones se cumplen, pues efectivamente el señor ESPINOSA OLAYA, i) es persona de especial condición, dada su discapacidad y condición de salud; ii) es posible presumir que los medios ordinarios de defensa no son idóneos, dado los términos prolongados que conlleva la solución de estos conflictos. iii) Dada las condiciones de salud del actor y la falta de recursos, lo que le hace aún más vulnerable, pues su deterioro es progresivo, lo que además le impide

---

<sup>3</sup> Fl 7 y ss Cño ppal

153  
solventarse por sus propios medios y iv) el actor, pese a sus múltiples limitaciones físicas y de salud, no ha desistido de reclamar el reconocimiento de pensión de invalidez, lo cual prueba su diligencia en busca de que se le reconozca el derecho alegado. Con lo previamente citado, se pueden concluir que dada la calidad del actor, en este caso se considera procedente reclamar por esta vía constitucional, un derecho prestacional.

Ahora bien, siendo procedente esta acción, se procederá a determinar si la decisión del A-quo estuvo conforme a las normas y pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo expresado por la accionada, es evidente que el actor cumple con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el cual establece que tendrán derecho a la pensión de invalidez las personas que tengan una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50% y que haya, cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sumado a que el actor le fue calificada pérdida de capacidad laboral en 79.55%.

De acuerdo con los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, se considera que el objetivo de la pensión de invalidez, es asegurar que las personas cuya capacidad laboral se ve disminuida reciban una compensación económica como una fuente de ingreso que les sirva para llevar una vida en condiciones dignas, y para lograr tal objetivo es indispensable que se cumpla con los requisitos plurimencionados en este proveído.

De otra parte, frente al argumento de la accionada, quien asevera que el actor, no cumple con los términos de cotización esto es las cincuenta semanas en los últimos tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, tenemos que en el caso en comento de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 48 de 1993, tienen derecho las personas que hayan prestado el servicio militar obligatorio a que dicho tiempo les sea computado para efectos pensionales, entre otras prestaciones económicas. La anterior disposición cuenta con fundamento constitucional en el artículo 216 de la Carta.

En el caso concreto, el actor solicitó que le sea tenido en cuenta el tiempo cotizado durante la prestación del servicio militar obligatorio para el reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual de acuerdo al material probatorio se evidencia que el señor ESPINOSA OLAYA, del 11 de enero de 2002 al 18 de noviembre de 2003, prestó el servicio militar obligatorio. Posteriormente, tuvo un accidente de origen común que le causó una pérdida de la capacidad laboral del 79.550%, con fecha de estructuración del 9 de enero de 2005, ante lo cual es evidente que en los tres años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral, se habían cotizado 50 semanas.

Por todo lo anterior, comparte este despacho judicial, la decisión tomada por el Juzgado de primera instancia, al tutelar los derechos invocados y en consecuencia ordenar a la AFP PORVENIR S.A., generar una nueva historia laboral, anterior a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, en la que se compute el término, cotizado bajo la prestación del servicio militar obligatorio.



En conclusión, al vislumbrarse vulneración a los derechos del accionante, la titular de este estrado judicial procederá a confirmar la decisión adoptada en Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado Pequeñas Causas y Competencia múltiple de Tuluá, Valle del Cauca.

#### VII. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá, Valle del Cauca, obrando como Juez Constitucional de Tutela, administrando Justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución,

#### RESUELVE:

**PRIMERO. CONFIRMAR** la Sentencia Nro.190 del 19 de octubre de 2016, proferida por el Juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple de ésta localidad. De conformidad a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído.

**SEGUNDO.** Por secretaría NOTIFICAR a las partes el presente fallo por el medio más expedito (Art. 30 Decreto 2591/91).

**TERCERO. ORDENASE** la remisión de las presentes diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
SANDRA LETICIA SUA VILLEGAS  
Jueza



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS  
Relacion Historica de Movimiento, Horizontal

Código  
Cuenta  
Estado Afiliado  
Fecha Afiliación

94225260  
20040715 7:15  
DEFINIDA  
2004-01-01

Nombre  
Ciudad  
SubEstado Afiliado  
Fecha Efectividad Afiliación

FABIO MONDO ESPINOSA OLARA  
TULUA  
INVALIDEZ RENTA\_L  
2004/07/15

Numero Cuenta  
Departamento  
Fecha Generación Informe  
Tipo de Vinculación

94225260  
NORTE  
2015/10/02  
MINUCION INICIAL

Fecha Pago	Período Pago	Mt Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	CGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Tipo Cotizante	Porcentaje de Inversión
20040801	200407	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20040801	200408	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20041001	200409	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20041101	200410	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20041101	200411	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20041101	200412	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	35,790	10,738	0	5,370	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050201	200501	94225260	MILLAN GARCIA EFRAIN	39,900	11,418	0	5,715	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200507	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(330)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200508	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(230)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200509	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(530)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200510	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(610)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200511	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(390)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200512	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(320)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20050601	200601	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(500)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20051201	200602	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(230)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20051201	200607	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(430)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20051201	200608	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(300)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli

151

Fecha Pago	Periodo Pago	Monto Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FC-PM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sanccion	Tipo Cotizante	Perfil de Inversión
20070107	200609	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(600)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070110	200610	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(270)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070120	200611	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(270)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070122	200612	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(320)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070123	200703	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(700)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070122	200704	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(300)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070619	200708	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070723	200709	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(900)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070821	200707	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(170)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20070824	200708	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20071022	200709	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(700)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20071129	200710	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(200)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20071224	200711	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(280)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080121	200712	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(210)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080325	200802	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(800)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080421	200803	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(100)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080519	200804	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(610)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080616	200805	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(100)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080611	200807	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(110)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20080622	200808	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(510)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20081231	200811	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(300)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090130	200812	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(600)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090227	200901	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(550)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090331	200902	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	EGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion	Tipo Cotizante	Portafolio de Inversión
20090410	200903	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(2100)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090529	200904	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(5400)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090626	200905	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(5000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090724	200906	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(1000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090828	200907	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(4500)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20090925	200908	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(2300)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20091023	200909	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(7300)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20091127	200910	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(8000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20091224	200911	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(7300)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100122	200912	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(2200)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100326	201002	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(1400)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100423	201003	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(4300)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100528	201004	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(4500)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100623	201005	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(2000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100827	201007	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(1,0400)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20100924	201008	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(5300)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20101022	201009	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(7000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20101126	201010	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(8500)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110222	201012	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(4700)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110520	201103	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(1800)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110527	201104	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(4000)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110624	201105	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(3500)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110726	201110	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(8400)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli
20110730	201112	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(2200)	0	0	0	0	0	0	0	DEPENDIENTE	Pen. Moderado Obli



Fecha Pago	Período Pago	Rol Pago	Razón Social	Aporte Obligatorio	Comisión	FSP	EGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sanción	Tipo Cotizante	Portafolio de Inversión
2013/02/27	201201	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(400)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/03/26	201202	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(410)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/04/30	201203	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(190)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/05/28	201204	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(480)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/06/27	201205	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(500)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/07/24	201206	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(200)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/08/29	201207	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(460)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/26	201210	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(1,010)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/28	201212	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(500)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/25	201301	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(600)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/25	201302	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(510)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/26	201307	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(540)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/09/30	201308	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(240)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/10/28	201309	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(610)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado
2013/11/25	201310	0	TRABAJADOR INDEPENDIENTE.	(530)	0	0	0	0	0	0	0	0 DEPENDIENTE	Pen. Moderado

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS**  
**Relacion de aportes**

Cédula:  
 Dirección:  
 Estado Afiliado:  
 Fecha Afiliación:

11768115  
 10127431570  
 INVALIDACION DEFINIDA  
 2004/07/01

Nombre: FABIO PARRISO ESPINOSA OLIVERA  
 Ciudad: TULUA  
 Sub-Estado Afiliado: INVALIDACION RENTA  
 Fecha Efectividad Afiliación: 2004/07/01

Número Cuenta: 6023837  
 Departamento: VALLE  
 Fecha Generación Informe: 2004/07/02  
 Tipo de Vinculación: VINCULACION INICIAL

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Seguro	Razon Social	BC	Días Cotizados	Aporte Obligatorio	Contribución	ESP	IGPM	Vot. Afiliado	Vot. Empleador	Alt. Riesgo	Sanción
2004/08/11	2004/07	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2004/09/10	2004/08	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2004/10/12	2004/09	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2004/11/11	2004/10	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2004/12/13	2004/11	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2005/01/13	2004/12	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2005/02/10	2005/01	94275260	MILLAN GARCIA TERRAIN	58.000	10	55,792	10,738	0	5,379	0	0	0	0
2007/01/27	2007/01	800340862	BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.	0		290,965,654	0	0	0	0	0	0	0



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**REPUBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL**  
**JUZGADO 002 LABORAL DEL CIRCUITO**  
**Tuluá – Valle del Cauca**

**Ref.** Ordinario laboral de primera instancia  
**Dte.** Fabio Alonso Espinosa Olaya  
**Ddo.** PORVENIR S.A.  
**Rad.** 2018-00066-00

**AUTO SUS No. 2022**

Tuluá, 18 de noviembre del 2019

Hecho el examen del expediente, se procedió a la revisión de la contestación de la demanda aportada por el apoderado de la parte demandada, PORVENIR S.A., hallándose que se encuentra ajustada a los imperativos legales exigidos en el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo.

Así mismo, el Dr. LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN, allegó al proceso, memorial visible a folio 87 del expediente, sustituyendo poder a la Dra. ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO, portadora de T.P. 212.604 del C.S. de la J., sobre el cual se decidirá en la parte resolutive de éste proveído.

En razón a lo expuesto, se convocará a los extremos de la Litis, a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas de que trata el artículo 77 del C.P.L. y de la S.S

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

**RESUELVE:**

- 1) TENER** por contestada legalmente la demanda, por la parte demandada, PORVENIR S.A., a través de su apoderado judicial.
- 2) RECONOCER** personería para actuar en representación de la parte demandada, PORVENIR S.A., al Dr. LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN, abogado en ejercicio, portador de la T.P. 54.805 del C.S. de la J.
- 3) ACEPTAR** la sustitución del poder aportada por el Dr. LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN, de acuerdo con lo mencionado en la parte considerativa, y, en consecuencia, **RECONOCER** personería Dra. ASTRID VERONICA VIDAL CAMPO, portadora de T.P. 212.604 del C.S. de la J., conforme al memorial poder visible a folio 87 del expediente.
- 4) SEÑÁLESE** como fecha para realizar la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de



pruebas el día veinticuatro (24) de junio de dos mil veinte (2020) a las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.).

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

El Juez,

  
**VICTOR JAIRO BARRIOS ESPINOSA**

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO  
TULUÁ VALLE

**19 NOV 2019**

Hoy, \_\_\_\_\_ se notifica por  
ESTADO No. 181 a las partes el auto que antecede.

  
**TRASIBULO ROJAS LOZANO**  
SECRETARIO



160



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO SEGUNDO LABORAL  
CIRCUITO TULUA - VALLE

## AVISO

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DECISIÓN DE EXCEPCIONES PREVIAS, SANEAMIENTO,  
FIJACIÓN DEL LITIGIO Y DECRETO DE PRUEBAS Art. 77 C.P.T. y S.S.

RADICADO	CLASE DE PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA
76-834-31-05-001-2018-00066-00	ORDINARIO DE PRIMERA INSTANCIA	Fabio Alonso Espinosa Olaya	PORVENIR S.A.	JUNIO 24/2020 HORA 02:30 PM

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DEL DESPACHO, EL DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) A LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.)

TRASIBULO ROJAS LOZANO  
SECRETARIO